

**LOS BOMBAZOS DE 1975 EN SLP:
TERRORISMO DE ESTADO**

(EL ROCHISMO Y LA GUERRA SUCIA)

Javier Padrón Moncada

INDICE

Introducción.....	4
I. La segunda piel del santismo.....	6
II. El gobierno vinculó al FPE con grupos armados y el atentado.....	34
Testimonios	
III. Carlos López Torres Con las bombas, el gobierno desactivó el movimiento.....	47
IV. Julio Hernández López Fonseca, el responsable histórico.....	55
V. Prisciliano Pérez Anguiano Sobrevive el espíritu revolucionario.....	62
VI. Jesús Mejía Lira.....	66
Una universidad popular, abierta a la sociedad, era nuestra aspiración	

INTRODUCCION

El 27 de enero de 2005 se cumplió el treinta aniversario de los tres bombazos que dejaron una estela de muerte y terror en la ciudad de San Luis Potosí, México. Esta represiva medida, disfrazada de “acción revolucionaria”, acabó con la vida de seis potosinos y sirvió de pretexto al gobierno para detener a estudiantes, obreros y comunistas, cabezas de una lucha contra el alza a la tarifa del transporte urbano.

No fue un hecho aislado lo ocurrido desde la fría madrugada de aquel 27 de enero de 1975, era la continuación de una política de represión que databa del gobierno de Gonzalo N. Santos. Los métodos violentos sólo se modernizaron, los propósitos son los mismos: acallar la disidencia, impedir la insurrección ciudadana en las urnas, la libertad de prensa y la autonomía universitaria.

A la luz del tiempo reposado y la revisión de expedientes, se considera a San Luis Potosí un “conejillo de indias” del viejo régimen priista para sus ulteriores procedimientos represivos. El apagón del 15 de septiembre de 1961 en la Plaza de Armas está entrelazado con la luz de bengala que surcó el cielo de Tlatelolco el dos de octubre de 1968; ciudadanos ejerciendo sus garantías de reunión y expresión, inermes ante el fuego cruzado de militares y policías.

Los responsables de la guerra sucia han sido requeridos por una fiscalía especial creada por el gobierno foxista, sin atreverse a aplicar la ley al expresidente Luis Echeverría por genocidio, deja la impresión de que todo es un formulismo judicial para cerrar este infame expediente y borrarlo de la memoria colectiva.

La historia política potosina de la segunda mitad del siglo 20, tiene sus manchas de sangre. La ciudadanización del organismo electoral en 1993 y la alternancia partidista lograda en el 2003, están precedidas de luchas urbanas y campesinas, sofocadas por el gobierno: sinarquistas, panistas, navistas, comunistas, estudiantes, obreros y campesinos, a veces unidos y otras separados, pagaron con rigor su osadía de enfrentar primero al santismo y luego al rochismo.

Hay asesinados, desterrados, torturados, desaparecidos. Lo mismo se reprime a opositores de izquierda que de derecha, no hay distinción. Hay un abuso de poder sin castigo, solapado, olvidado. Las fechas significativas de la resistencia potosina –15 de septiembre de 1961 y 27 de enero de 1975– no han alcanzado un lugar en nuestro calendario cívico, quizá por falta de conocimiento o por convenir así a quienes apuestan a la amnesia para seguir repitiendo la misma historia del garrote.

Con el surgimiento de grupos armados en varias partes del país, al ver cancelada de manera definitiva la vía pacífica de cambio con la matanza del 10 de junio de 1971, se recrudesció la represión y los mecanismos inhibitorios de la inconformidad estudiantil. San Luis Potosí no fue la excepción. En el estado no se registró el brote de organizaciones subversivas, sí la presencia coyuntural de células de otras entidades en actividades clandestinas de propaganda y acercamiento con dirigentes estudiantiles para ganárselos a su causa, sin éxito; es en la región Huasteca donde tuvo mejor eco la prédica guerrillera, sin llegar a un levantamiento armado, con la invasión de latifundios de nacionales y extranjeros.

La experiencia acumulada de estas luchas de distinto signo, no corresponde con la postración económica y social de la entidad. La indispensable democracia electoral alcanzada no es suficiente cuando no hay una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de los potosinos. Faltan muchas otras luchas por librar. La del voto apenas se ha ganado. El balance de lo que dejó el modelo político rochista no es alentador: los indicadores de pobreza y marginación se mantienen entre los primeros lugares del país, la población indígena compite con la de Chiapas, y es creciente la corrupción impune de la clase gobernante.

El trabajo hemerográfico y los testimonios de exdirigentes estudiantiles y comunistas, recogidos aquí, fueron publicados en 1995 en el periódico *El Ciudadano Potosino*, con motivo de los 20 años de los bombazos; ahora, al cumplirse la tercera década, se retoman con ligeras correcciones y se agrega un texto que aborda la instauración rochista sobre las ruinas del santismo, encarnando una modernidad con plazas de cantera rosa que reprimió a los movimientos sociales.

I. LA SEGUNDA PIEL DEL SANTISMO

El periódico agitador

A mediados de los años 50 del siglo pasado, el malestar social en San Luis Potosí, hundido en el atraso económico y político, atribuido a Gonzalo N. Santos, privilegiado por el gobierno federal, encontró canales de expresión en un periódico y en una institución educativa que servirían de palancas del cambio social.

En una riesgosa arena política, abonada por sinarquistas y panistas, *El Heraldo* y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fueron los focos de una insurrección ciudadana. Desde su ámbito y circunstancia, contribuyeron a derrumbar los diques del santismo y a construir un nuevo orden político, a tono con el modelo “desarrollista”, en el que no cabía el poder regional y la justicia sumaria del huasteco.

La noche del viernes siete de enero de 1955, Carlos Loret de Mola, director general de *El Heraldo*, se quedó solo en la sala de redacción con la edición a medio hacer, el personal le renunció en masa¹. El periodista yucateco recién había mudado su residencia de Tampico a la ciudad de San Luis Potosí, para vivir en la azotea del periódico, del que no salía, por el temor a un atentado por sus críticas al cacicazgo. En la edición del día anterior, Loret de Mola publicó *La Batalla de Ebano*, en el que desacraliza al “todopoderoso símbolo mismo de la estructura caciquil mexicana”, y al gobernador Ismael Salas no lo baja de “pelele”. El artículo, en palabras del autor, “desencadena la tormenta”.

Se propaga la denuncia, crece la disidencia y la iglesia católica se fractura: el obispo Gerardo Anaya anatemiza a *El Heraldo*, mientras el obispo auxiliar José de Jesús Alba Palacios respalda la libertad de prensa, las alas de libertad del temeroso rebaño. Santos

¹ Carlos Loret de Mola, *Los caciques*. México, Grijalbo, 1979, p.15. En un amplio relato, *El cacique blanco*, expone el desarrollo de la campaña periodística contra Santos y la amistad que terminó por tejerse entre ambos: encuentros efusivos en informes presidenciales y en las guaridas del tigre potosino, con comida huasteca sobre la mesa, compartida con José Vasconcelos o Francisco Martínez de la Vega.

ya tenía en la mira al director Loret de Mola, quien también lo era de *El Mundo* de Tampico y *El Heraldo* de Aguascalientes, por un tema anterior destacado por los tres diarios: la represión a los choferes de Tampico y Ebanó que protestaron por el aumento a la gasolina.

Cada edición es un duro golpe: los artículos de Rubén Salazar Mallén, Francisco Martínez de la Vega y el general Manuel C. Lárrega, el manifiesto de una corriente priista (*La soberanía de San Luis Potosí o la soberanía de Gonzalo N. Santos*), los desplegados de Salomón H. Rangel y la denuncia de la CNC del acaparamiento del 60 por ciento de las tierras de riego por Santos e “incondicionales”, hicieron reaccionar al gobernador Salas, que además de la renuncia de los reporteros, orquestó un boicót publicitario y una fallida huelga de los operarios de la rotativa.

En *Los caciques*, Loret de Mola afirma: “...embarqué a *El Heraldo* en una batalla contra las autoridades potosinas, adictas a don Gonzalo N. Santos”, y le estampa un cariz providencial a su azaroso paso por San Luis: “Y se hizo una breve, relampagueante campaña, contra el cacicazgo de Santos, en su madriguera. Unos cuantos hombres y una muchacha que tampoco tuvo miedo escribimos un periódico diario y prendimos la mecha para un incendio que, años más tarde, acabaría con el cacicazgo potosino”.

El año de 1955, fue electoral: la sucesión de Salas ponía en juego la fuerza de Santos, quien impone a Manuel Álvarez López. Por mediación del presidente Adolfo Ruiz Cortines se reunieron el cacique y el periodista. El ambiente es tenso, el anfitrión, con guantes negros, tiene al alcance de la mano derecha una pistola 45. Logran un acuerdo: se suprime el “tono exasperado” de la campaña periodística y se detiene “cualquier acción hostil del poder político potosino” contra *El Heraldo*.

Loret de Mola regresó a Tampico, poco después renuncia y se va a Chihuahua a trabajar a la Cadena García Valseca. Apadrinado por Adolfo López Mateos, hizo carrera política: diputado federal, senador y gobernador de Yucatán; en tanto, el político potosino perdió la protección presidencial hasta 1979, con las expropiaciones de sus ranchos El Gargaleote, La Jarrilla y Los Sabinos, ejecutadas por José López Portillo, “el último presidente de la Revolución”, para un proyecto agrario e hidráulico que, paradójicamente, generó más corrupción, burocratismo y miseria en la Huasteca.

El nuevo universitario

El Herald no era la única voz disonante, la principal trinchera de resistencia antisantista era la UASLP, un centro de poder académico que entró en colisión con el empistolado Gonzalo. Los principales impulsores de este “despertar universitario” que influyó de manera significativa sobre otros sectores y clases sociales, fueron el rector Manuel Nava Martínez y el geógrafo Ramón Alcorta Guerrero, un defensor de la autonomía universitaria en la década de los 30.

El dos de enero de 1955, cinco días antes del artículo de Loret de Mola, al inaugurar la Facultad de Humanidades Alcorta pronunció un discurso en el que refirió la necesidad de vincular a la UASLP con la sociedad para superar el atraso político, social y económico, creando a un “nuevo tipo de universitario” que rescate los valores universales. Alcorta era la sombra intelectual de Nava, un rector resistente a los embates del santismo; más apoyo económico a la institución a cambio de su salida, era la generosa oferta.

En la disputa legal por los terrenos donde se construía el Hospital Central y planeaba la Escuela de Medicina y Zona Universitaria, Santos se valió del fraccionador Carlos López para obstaculizar la expropiación de 25 hectáreas del ejido Garita de Jalisco²; en 1954, la UASLP fijó su posición jurídica y, a la postre, se imponería. El rector murió en funciones en agosto de 1958. El movimiento germinó en el seno universitario y pasaría al terreno de la lucha electoral con su hermano Salvador, al postularse como candidato independiente a la presidencia municipal; la cúpula del PRI lo rechazó, era el escogido por las bases.

También con Alcorta de estrategia político, Salvador ingresó al sector popular del PRI un mes antes de la muerte de su hermano, encandilado por la aureola vasconcelista del candidato presidencial López Mateos, cuya declaración de ocho columnas en todos los soles del país: “Los cacicazgos subsisten en los pueblos que los toleran”³, se interpretó erróneamente como un aval para iniciar la guerra cívica, cuando sólo fue un aforismo de banqueta. Con la Federación de Profesionistas e Intelectuales en el partido

² Desde entonces este núcleo ejidal, dotado por el presidente Pascual Ortiz Rubio en 1930, por su ubicación se convirtió en un botín de grupos económicos y en fuente de reclamos legales, promovidos por ejidatarios al ser privatizado en 1993 con la reforma salinista, la familia del fraccionador santista fue la principal beneficiada, en sociedad con los García Navarro y Rangel Lozano. *Metrópolis*, núm. 31, marzo de 1994.

³ En su libro citado, Loret de Mola confiesa que él indujo la pregunta a través de su compañero de la Cadena García Valseca, Javier Santos Llorente, “lo cual resultaría una alusión directa a Santos”, quien se sumó a la gira del candidato presidencial durante el trayecto de Tampico a Tuxpan, presencia que “fue comentada en términos negativos”, pp. 58-59.

oficial, Nava encabezó la disidencia abierta en la entraña santista, en disputa por el poder, el bien máspreciado del general.

Varias organizaciones apoyaron a Salvador: Frente Reivindicador, Alianza Cívica, Unión Nacional Sinarquista y Partido Comunista Mexicano. El candidato santista, Francisco Gutiérrez, no dio el ancho. Con la campaña encarrilada, las pasiones se desbordaron durante el desfile del 20 de Noviembre: se infiltraron estudiantes del grupo Germán del Campo con simbólicos ataúdes y lanzaron huevos a la investidura del gobernador; ante el bochorno, salió por la puerta de atrás, abandonó la ciudad y el cargo que ostentaba para no volver, ante la presencia impávida de Santos que veía así el comienzo del fin de su cacicazgo...

El falso vasconcelista

Ante el vacío de poder, el kiosco de la Plaza de Armas se convirtió en un caldero antisantista. Como último recurso para salvar su suerte, Álvarez acudió a la toma de protesta de López Mateos. Al no haber impedido la presencia del fugitivo gobernador, el presidente electo marcó la que sería durante su sexenio una política de represión contra el navismo y de protección a Santos y su respectivo feudo huasteco; lo haría incluso director de Pesca.

Se calculó en 25 mil las personas que se manifestaban en las calles. Intervino el Ejército que tenía semanas al acecho, y hay detenidos, balazos, muertos: el policía secreto Lucio Medina y el niño Juan Antonio Gómez, atribuidos al jefe policiaco Felipe Sánchez. El comercio cierra sus puertas, las actividades se paralizan. Los detenidos obtienen su libertad, Nava ganó las elecciones, y designa secretario del ayuntamiento a José Francisco Pedraza, un historiador liberal cercano a Alcorta.⁴

López Mateos envió de gobernador emergente al diputado Martínez de la Vega, periodista de izquierda, fugaz secretario particular del gobernador Santos y primo hermano de Nava. En su primer informe, dijo de sí mismo: "...un ciudadano de buena voluntad, sin resentimientos, sin compromisos con grupos determinados, se hizo cargo del Poder Ejecutivo", y alardeó: "Hoy, el potosino es un hombre libre que cuenta en todo momento con el respeto de su gobierno. A nadie se ha perseguido ni se perseguirá por sus ideas políticas, ni por sus convicciones religiosas". El armisticio entre el gobernante de avanzada y el conservador alcalde se disolvió el 10 de enero de 1961:

⁴ Ambos son coautores de *Bibliografía histórica y geográfica del estado de San Luis Potosí*, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1941.

próxima la sucesión estatal, Nava buscó la candidatura del PRI, se le vuelven a cerrar las puertas y se reafirma como un precursor de la democratización priista.

Buena parte de comunistas⁵ y sinarquistas pintaron su raya con la nueva empresa del doctor Nava, apoyado sólo por panistas. Llegaron dos viejos lobos de mar como delegados del PRI a tratar de apaciguarlo, sin conseguirlo: Enrique Olivares y Carlos Hank. El candidato ungido es Manuel López Dávila. El 21 de mayo de 1961 es asesinado el abogado Jesús Acosta, coordinador de la campaña navista en Tamazunchale, por el diputado priista Cupertino Vargas. Las elecciones, tachadas de fraudulentas, son ganadas el dos de julio de 1961 por López Dávila; a Nava sólo se le reconoció mayoría de votos en la capital, desde entonces sería su bastión.

Lo que a la distancia se ha considerado un ensayo de la estrategia represiva del régimen priista de 1968 y 1971, contra las movilizaciones estudiantiles, ocurrió en la Plaza de Armas durante un apagón minutos antes de la medianoche del 15 de septiembre de 1961, con la matanza desatada por un fuego cruzado entre un grupo de empistolados que irrumpió en ese momento y varios francotiradores, apostados en azoteas y balcones, mientras los navistas ya habían dado su *Grito de Independencia* alternativo en el jardín de Tequis. No hay un número oficial de muertos, algunos testimonios refieren entre 50 y 80, y el periódico *Tribuna*, órgano navista, es destruido por soldados.

Por la mañana De la Vega rindió su último informe: “Llegué al gobierno de San Luis como un revolucionario, y me voy de ese gobierno con mis convicciones revolucionarias acentuadas y vigorizadas por la experiencia”. Aunque continuaba a cargo del Poder Ejecutivo en cónclave nocturno en Palacio con el comandante de la XII Zona Militar, el general Alberto Zuno (hermano mayor de José Guadalupe, exgobernador de Jalisco y cabeza de la familia política de Luis Echeverría Álvarez, entonces subsecretario de Gobernación).

La historiadora María de los Angeles Magdaleno, exfuncionaria de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, al reconstruir la historia de *Los Halcones*, con base a expedientes de las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, presume la participación del grupo paramilitar en la infausta noche potosina a través del fundador y operador de *Los Halcones*, Manuel Díaz Escobar, militar que se

⁵ Décadas después, Nava demostró que nos les tenía mucha confianza ni aprecio a los comunistas, al afirmar que les entregó la administración de los panteones para que “arengaran a los muertos”. Fue

desempeñaba como secretario de la Confederación de Agrupaciones Populares, bajo las órdenes del dirigente nacional del PRI, Alfonso Corona del Rosal.⁶

Por la matanza del 15 de septiembre, Nava es enviado al Campo Militar Número Uno y luego al palacio negro de Lecumberri (cerca de otros presos políticos del régimen: Demetrio Vallejo, Valentín Campa y David Alfaro Siqueiros); los delitos imputados van desde rebelión hasta homicidio; se le intentó vincular con Celestino Gasca, un general que tramaba un alzamiento; la defensa de Adolfo Aguilar y Quevedo, con la ayuda de Antonio Rosillo Pacheco, Manuel González Hinojosa y Manuel Calvillo, echó abajo la mascarada de López Mateos, un mes después se decreta su libertad.

El vecino de Tequis regresó al terruño en medio del alborozo popular, su liderazgo carismático se arraigó en la epidermis colectiva. Por todo lo ocurrido, López Mateos mostró lo lejos que estaba del vasconcelismo, decepcionó a los potosinos que habían visto en él a un hombre de buena voluntad, el ayuntamiento presidido por Nava lo nombró en balde “hijo predilecto” el cinco de noviembre de 1960; esta confianza a ciegas en el presidente fue un caro error.

Persistente, Nava retomó la lucha en 1963 y funda el Partido Demócrata Potosino. Volverían él y otros a pisar la cárcel, a sentir la rigidez del gobierno. La acusación es absurda: se les implica en la autoría de un “panfleto pornográfico” y del libro *La grieta en el yugo*, de Antonio Estrada⁷, exdirector de *El Heraldo*. Nava es torturado, el certificado médico es crispante. Salió libre el 18 de febrero. Los gobiernos federal y estatal le cancelaron toda posibilidad de participación política. El movimiento civilista, con sus ribetes de épica, se retiró de la vida pública, sería aliado o beligerante de los sucesivos gobiernos en tanto se reconociera o negara su fuerza política latente, su peso en el centro del poder.

En la lucha por la rectoría, el bando navista perdió la partida o consintió la llegada de Jesús N. Noyola, abuelo del vigente modelo de dominio político sobre la UASLP; una de sus sabias medidas fue el cierre de Humanidades para no correr riesgos de agitación intelectual, como itinerantes profesores venían poetas y filósofos del exilio

Prisciliano Pérez, dirigente del PCM y obrero de la fábrica Atlas, el regidor que desempeñó esa cartera en el ayuntamiento 59-61.

⁶ *La Jornada*, 21 de abril de 2003. Luego de que renuncia, Magdaleno denunció hostigamiento de la Fiscalía en su contra y su equipo de cómputo, con información de sus pesquisas, fue robado de su domicilio.

⁷ 1963, edición de autor. Presenta la visión sinarquista de la lucha contra Santos y a un navismo claudicante.

español. Concentrado en su afán electoral, el navismo olvidó para siempre su origen universitario.

“Defensor del pueblo”

El 26 de septiembre de 1967, en una atiborrada plaza de Los Fundadores ante el presidente Gustavo Díaz Ordaz, al tomar protesta como gobernador Antonio Rocha Cordero se deslindó del gobernador saliente y odiado santismo, definió su ideario político, trazó las nuevas coordenadas del ejercicio del poder bajo su mando:

El poder público debe ser un defensor del pueblo y no quien lo amenace. Todo acto de autoridad que rebase los mandamientos de la ley, lo consideraré un abuso que debo frenar en lo que a mí corresponda y corregir cuando de otra autoridad se trate. El hombre debe esperar de sus gobernantes respeto a la dignidad, es deber que no se le restrinja su libertad, se atropelle su hogar, se le sujete a obligaciones que la ley y la razón no justifiquen, o se le prive de acceso a las fuentes del conocimiento. Se debe gobernar, no simplemente mandar (...) Confirmo la voluntad de gobernar con la colaboración de quienes tienen su hogar en esta tierra, sin más distingo que el de su capacidad y laboriosidad.⁸

Díaz Ordaz elogió a su excolaborador, resaltó el nuevo ciclo político: “Él realizó en unas cuantas semanas la tarea ingente de la unión de los potosinos en los propósitos comunes de mejoramiento colectivo y de armónica convivencia de unos con otros; él despertó la fe dormida del pueblo potosino para emprender una nueva etapa de su historia”.⁹ Con la “dolorosa espina clavada en el corazón” de una visita anterior al Altiplano, lanzó una grave advertencia que, al paso de los años, sería el sello distintivo de la entidad: “Si se destruye el clima de unidad y concordia, se habrán destruido las bases del progreso material y espiritual de San Luis Potosí”.

Rocha recibió un estado empobrecido, al borde del colapso financiero. El presupuesto anual ascendía a 71 millones de pesos, lo que colocaba a San Luis Potosí en el lugar 21 en el ámbito nacional, sólo por arriba de Aguascalientes, Colima, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Querétaro. Para analizar la situación del erario convocó a las personas “más distinguidas por su actividad social, económica e intelectual”, y mostró así su manera de ejercer el poder, tomando en cuenta sólo a notables y opositores de corte derechista.

El seis de abril de 1912 nació Rocha en la capital potosina; abogado por la UASLP en 1935; procurador de Justicia en los tres primeros años del gobierno de Santos y de la República en los tres primeros de Díaz Ordaz; secretario de Gobierno de Tamaulipas

⁸ *San Luis Potosí Informa*, núm.1, noviembre de 1967, pp.3-4.

⁹ *Ibid.* p.12.

(1947-1948), diputado federal (1949-1952 y 1979-1982) y senador (1952-1958). Su carrera la coronó como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1974-82). El Congreso del Estado le otorgó en 1986 la medalla *Plan de San Luis*, y murió en el Distrito Federal el 16 de enero de 1993. Esta trayectoria de medio siglo en los tres poderes se volvió un paradigma de la clase política local, un oráculo al que era necesario recurrir. Aún después de concluido su sexenio tuvo influencia sobre el destino político del estado; no siempre atendida por el centro.

Prohijó nuevas generaciones de políticos que lograron detentar el poder en la entidad con altas y bajas hasta el 2003. La mayoría de los gobernadores, salvo Carlos Jonguitud Barrios (1979-1985) y Gonzalo Martínez Corbalá (1991-1993), eran o se asumieron miembros de la escuela rochista, la dominante en el último cuarto del siglo veinte: Guillermo Fonseca Alvarez (1973-1979), Florencio Salazar Martínez (1985-1987), Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991), Fausto Zapata Loredó (1991), Teófilo Torres Corzo (1993-1994), Horacio Sánchez Unzueta (1994-1997) y Fernando Silva Nieto (1997-2003).

Sin embargo, este cuadro de gobernantes, de una época muy distante y diferente a la santista, por sus resultados se le asemeja mucho, como si fuera una segunda piel; también recurrió a métodos represivos y al saqueo del erario; dejó a la entidad sumida en el sexto lugar nacional de pobreza y marginación (Consejo Nacional de Población, 2000), entre las entidades con mayor corrupción (Transparencia México. Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003), y con una preocupante indiferencia ciudadana, reflejada en el proceso electoral del 2003 con un abstencionismo cercano al 60 por ciento, sobre todo en elecciones municipales.

El exgobernador Santos (1943-1949) se atribuye en sus delirantes *Memorias* la buena estrella de Rocha, asume casi la paternidad entera de su trayectoria: "...fue, bajo mi influencia política, diputado del Congreso de la Unión, el mejor de la República, muy destacado. Posteriormente y de acuerdo con las reiteradas peticiones que para ello hice al presidente Gustavo Díaz Ordaz, ocupó el puesto de gobernador al estado de San Luis Potosí, también fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a sus relevantes méritos y conocimientos judiciales".¹⁰ Los que conocieron y trataron a Rocha no consideran que haya sido tan determinante la tutela santista, sí comparten, en

¹⁰ Gonzalo N. Santos, *Memorias*. México, Grijalbo, 1994, p.778.

cambio, los elogios que no le escatima, “con prestigio en la Universidad y en toda la ciudad, muy inteligente y eminente penalista”.

Como procurador de la República confirmó el seis de abril de 1965 una resolución de improcedencia de la denuncia que interpuso la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística contra el autor de *Los hijos de Sánchez*, Oscar Lewis y Arnaldo Orfila, director del Fondo de Cultura Económica, por haber editado un libro “subversivo”, “obsceno y denigrante para nuestra patria”.¹¹ Su imagen de juriconsulto la puso en duda el historiador Rafael Montejano al ironizar que presumió ser un penalista y dirigió una revista de derecho, pero nunca publicó un solo artículo sobre la materia.¹² Cuenta una anécdota que Rocha dispuso que su biblioteca pasara a la UASLP, por considerarla sin mérito, la rechazó Montejano, director de Bibliografía Potosina, y fue enviada a la Casa de la Cultura donde se abrió un fondo con el nombre del exgobernador.

A su paso por la PGR sorprendió a la policía norteamericana por denunciar “constantemente” ante el presidente Díaz Ordaz, al gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez, por sus nexos con el narcotráfico y “para muchos la clave del imperio de Félix Gallardo”, primo de los Arellano Félix, del cártel de Tijuana.¹³ En contraste, cuando fue secretario de Gobierno en Tamaulipas, cargo que ocupó por recomendación de Santos al gobernador Raúl Gárate (general, compañero de armas del huasteco), trabó amistad con Juan Nepomuceno Guerra, contrabandista de la época (y tío de Juan García Abrego, quien sería cabeza del cártel del Golfo y extraditado a Estados Unidos en 1996; a Guerra se le vinculó, desde el sexenio de Adolfo López Mateos, con Raúl Salinas Lozano, secretario de Comercio).

El orden rochista

Un año antes de la masacre en Tlatelolco renunció a la Procuraduría General de la República para postularse de candidato a la gubernatura de San Luis Potosí para el periodo 1967-1973. El triunfal retorno a casa parecía alejarlo de la ruta sucesoria y del fantasma de la rebelión estudiantil que recorría el país y el mundo.

¹¹ Oscar Lewis, *Los hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mexicana*. México, Joaquín Mortiz, 1965 (apéndice).

¹² Entrevista con RMyA: “Macabeos, un apodo, como el del perro al que llaman Bobi”. *La Noticia*, núm. 17, agosto de 2000. Montejano no incluyó a Rocha en su *Biobibliografía de los escritores de San Luis Potosí*, UNAM, 1979; es una útil obra de consulta, pero cuestionada por sus criterios laxos, al registrar a autores de simples tesis o de esporádicos artículos e ignorar a escritores sólo porque no eran de su agrado.

¹³ Gerardo Albarrán, *Los Arellano Félix, los herederos*, p.175, en *El asesinato del cardenal ¿Un error?* México, Grupo Editorial Planeta, Col. México Vivo, 1994.

Fue el hombre escogido por Díaz Ordaz para acabar con el largo ciclo de represión y desencuentro del gobierno con la sociedad, comenzado por Santos y continuado por Ismael Salas (1949-1955), Manuel Álvarez López (1955-1959), Francisco Martínez de la Vega (1959-1961) y Manuel López Dávila (1961-1967). La candidatura de Rocha no causó sorpresa, ya se le esperaba, era conocido y estimado. La silenciada oposición navista y otras corrientes dieron su beneplácito.

Rocha era la figura predestinada para las clases media y alta, él representaba el arribo o al menos el anhelo de la modernidad, tanto política como económica, demorada por la persistencia del santismo, un resabio de la revolución. Su sexenio ha sido considerado “el mejor de todos”; pese a ejercer uno de los presupuestos más bajos del país, dio un fuerte impulso a la infraestructura industrial, carretera y educativa-cultural, remozó la capital, integró el gabinete exclusivamente con potosinos, formó patronatos con navistas, alentó el relevo generacional de la clase política, abolió la pena de muerte y el gasto público se transparentó con la publicación mensual de informes financieros, práctica puesta en boga por Nava en su primer periodo de presidente municipal.

No escaparía del destino: durante su gobierno se desarrolló un movimiento estudiantil que se articuló con demandas urbanas y la lucha campesina contra el latifundismo; casi a la mitad de su sexenio, sería tomado en cuenta por Díaz Ordaz que buscaba otras opciones para tratar de impedir que Echeverría fuera su relevo. En la capital potosina hubo pronunciamientos de sectores de la oposición a favor de la candidatura presidencial rochista. El 26 de septiembre de 1969, a manera de “felicitación por sus dos años de buen gobierno”, el sinarquista Salomón H. Rangel consideró que el gobernador cubría los requisitos de “patriotismo, inteligencia, capacidad y honradez”, para dirigir el país.¹⁴

La edad lo descartó de la sucesión presidencial según la “reminiscencia” del exdirector de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, Díaz Ordaz “coquetó” con la idea de postular al potosino, pero tendría cincuenta y ocho años en 1970. “En una ocasión, saliendo de un acuerdo con el Presidente, meses antes del destape, un periodista –quizá inducido– le preguntó sobre sus posibilidades. Respondió lacónicamente: ‘México es un país joven y necesita de un Presidente joven’. Con ello parecía descartar a varios precandidatos de edad similar”.¹⁵

¹⁴ Salomón H. Rangel, *Forjando mi destino. (Apuntes de mi vida)*. México, 1989, p.311.

¹⁵ Jorge G. Castañeda, *La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México*. Extra Alfaguara, 1999, pp.325-326.

“Nueva institucionalidad autoritaria”

La raíz santista de Rocha desapareció a los ojos del navismo; la sociedad estaba lastimada y la entidad en el atraso, y se le veía distanciado del cacique, cuya fuerza estaba marchita, y resistió con otros ganaderos, mediante recursos legales y presiones políticas la expropiación de sus tierras hasta 1979, destinadas al proyecto Pujal-Coy; fracasado, entre otras razones, por la reconversión de las tierras de ganadería al cultivo a base de riego y por el “modelo paternalista que privilegió la reproducción del poder y el control político más que la producción agropecuaria”.¹⁶

El hombre de baja estatura, moñito y gruesas gafas, rápido se echó a la bolsa al navismo y clases altas, les compartió el poder e hizo lo posible por desaparecer las esquilas del santismo, dejando las indispensables para la marcha del nuevo orden que emergía en un sosegado entreveramiento de generaciones y maneras no tan dispares de ver el mundo. Una “máxima” que se le atribuye a Rocha y lo retrata con fidelidad, es la de que “basta ponerse de acuerdo con unas cuantas familias para gobernar a todos los potosinos”. En trance su propia sucesión, reprimió los movimientos estudiantil y campesino, sectores que no habían sido valorados ni sus demandas atendidas. Una apreciación crítica de este sexenio es la que exponen dos historiadores del círculo de poder del exgobernador Sánchez, de estirpe rochista:

El régimen de Rocha mantuvo los mecanismos tradicionales de control político y su misma designación fue decisión del poder político central. Así surgió una nueva institucionalidad autoritaria en San Luis Potosí. Durante su gobierno, la oposición se manifestó, como en muchas otras partes del país, desde la izquierda universitaria y se vinculó a las demandas populares urbanas y los movimientos campesinos. Ya no era la izquierda de los obreros de la Cooperativa Atlas, de los ferrocarrileros o los mineros, sino principalmente de los sectores magisterial y estudiantil. El gobernador trató de evitar confrontaciones que abrieran las heridas recientes; cauto, impulsó obras importantes de remodelación en la capital que fueron una revaloración simbólica del espacio urbano donde había surgido el movimiento político de finales de los cincuenta.¹⁷

Esta “nueva institucionalidad autoritaria” incluyó los intereses del movimiento navista, eso explica la ausencia, el silencio del caudillo ante las luchas estudiantiles y

¹⁶ Miguel Aguilar-Robledo, *Autopsia de un fracaso: El caso del proyecto Pujal-Coy de la huasteca potosina*. México, Editorial Ponciano Arriaga, 1995, p.110.

¹⁷ Isabel Monroy Castillo y Tomás Calvillo Unna, *Breve Historia de San Luis Potosí*. México, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1997, p.307.

campesinas de la década de los 70, lo suyo era la lucha electoral. Nava mantuvo comunicación e intercambio de “impresiones” con el presidente de la Federación Universitaria Potosina, José Luis Sandoval Torres; la hija del doctor, Concepción Guadalupe Nava Calvillo, sirvió de enlace. Prudencia, fue la recomendación del curtido político al joven estudiante, “es muy sensible la piel de la universidad”, le dijo.

La inclusión en los patronatos, la entrega de notarías y cargos públicos a opositores y empresarios, fue una estrategia política de Rocha que luego sería adoptada por otros gobernadores con el mismo propósito de “reconciliación” y “reconocimiento” de la diversidad (el caso de Sánchez es emblemático: incluyó a hijos de viejos navistas que fueron funcionarios rochistas o a éstos mismos y, sin pudor, a familiares políticos que reunían ambas calidades). La concordia se reflejaba en la mixtura del gabinete, faltó únicamente la izquierda, radical y reacia a colaborar con el gobierno “burgués”.

Entre los colaboradores que tuvo en su sexenio, figuran Felipe Valle (Fomento Agrícola y Ganadero), Ramón Zamanillo Lavín (Promoción Industrial), Ramiro Robledo Treviño (Secretaría de Promoción de Obras y Servicios), Alfonso Lastras Ramírez (Procuraduría General de Justicia y Secretaria de Gobierno; se convertiría en el albacea político del rochismo), Félix Dauajare (Educación Pública, presidente de la FUP durante el gobierno de Santos), Carlos Serna (Tesorería), Leonardo Hernández (Obras Públicas), Emeterio López (PGJE), Jorge Eduardo Vélez Barrera (Junta de Conciliación y Arbitraje), Odilón Carrillo (Pensiones), Abel Elizondo (Registro Público de la Propiedad), Roberto Oliva (Asistencia Social), José Luis Vega (Penitenciaria), Pedro Ignacio Puente (Finanzas), Alfredo Villalobos (Salud) y Guadalupe Vega (Defensa del Trabajo).

Sin novedad en el frente

Rocha rindió su primer informe el 15 de septiembre de 1968, semanas antes del matadero en Tlatelolco. En el contenido del documento destaca la atención al tema agrario, sería una constante del sexenio: se localizaron 60 mil 100 hectáreas susceptibles de afectación, se resolvieron 46 dotaciones y ampliaciones de ejidos; pero estaba lejos de afectar la selva santista; ante la prensa defenía se exculparía con el argumento de que los latifundios eran “competencia federal”.

El 20 de diciembre se trasladó a la capital del país para rendirle al presidente Díaz Ordaz un parte informativo sobre la situación local: “...ni las fábricas ni las escuelas habían parado una sola hora, (...) no se había presentado ningún problema político,

estudiantil ni social”¹⁸; el Congreso del Estado aprobó ese mismo día la iniciativa presidencial para conceder el voto a los 18 años, medida vigorizante de la rebelión estudiantil.

San Luis Potosí, como la mayor parte del país, estuvo frío e indiferente ante el genocidio. Los brigadistas del Consejo Nacional de Huelga que llegaron a la ciudad, antes y después del dos de octubre, no tuvieron eco. Era cierto lo que informó Rocha, no hubo brotes estudiantiles ni de otra naturaleza (aunque él asistió de improviso a una reunión que sostuvieron estudiantes potosinos con huelguistas, llegó acompañado sólo de su chofer). El presidente de la FUP, Miguel García Atilano, y los posteriores Héctor Gerardo Hernández y Roberto Naif Kuri no se apartaron de la autoridad, pero a partir del 69 estudiantes, teatreros y comunistas realizan pequeñas manifestaciones en homenaje a los caídos el dos de octubre, fecha a la que se agregaría el 10 de junio de 1971, y en solidaridad con electricistas, estudiantes de Sinaloa y el pueblo de Vietnam.

La relación del gobernador con los estudiantes no podía ser mejor. Acudía a la cabina de Radio Universidad para ser entrevistado sobre diversos temas. Los empresarios, la derecha y la prensa también están de plácemes. Este ambiente de rosas y lavanda lo ilustra en 1969 el diputado priista Jorge Odilón, concuño de Nava, al responder el segundo informe de gobierno:

No tiene antecedentes en nuestro estado, la forma como usted ha manejado los dineros del pueblo, la información exacta de su destino, la oportunidad que ha brindado al propio pueblo para intervenir en la ejecución de las obras públicas (...) Solamente un verdadero gobernante, un gobernante en el sentido más amplio y exacto que podamos dar al término, es capaz de aglutinar a su alrededor todas las fuerzas populares y sensibilizar a las más encontradas tendencias para desarrollar una obra de gobierno verdaderamente popular.¹⁹

El 11 de mayo de 1970, *Excélsior* publicó una entrevista del reportero Alejandro Iñigo, en la que Rocha no ocultó su limitada visión de la lucha estudiantil; habló del bajo presupuesto: 90 millones de pesos; reconoció un atraso de 25 años y el “problema número uno”, la pobreza en el Altiplano. Iñigo recogió la percepción que tenía el potosino común del gobernador: “El licenciado Rocha sale solo a caminar por las calles de San Luis. No tiene cuerpo de ayudantes y la gente lo saluda respetuosamente. Va a comer solo al restaurante La Lonja”. A la pregunta sobre la agitación estudiantil en otras partes y su relación con la juventud potosina, respondió:

¹⁸ *San Luis Potosí Informa*, núm. 3, enero 1969, p.3.

¹⁹ *San Luis Potosí Informa*, núm. 12, octubre 1969, p.47.

—Yo comprendo que la juventud es rebelde por naturaleza. Antes de volvernos hombres maduros fuimos jóvenes y no muy distintos a los de ahora. Esta comprensión me permite mantener relaciones muy cordiales con los jóvenes, principalmente los muchachos universitarios. De tarde en tarde nos reunimos frente a un micrófono de la difusora universitaria. No hemos tenido un solo conflicto. Y si éste se presentara, sería producto de gentes mal intencionadas venidas de fuera. Hemos colaborado con la universidad para construirles sus modestas escuelas de Enfermería, Odontología y Ciencias Químicas. Y en breve empezaremos la ampliación de la Escuela de Derecho. Fui maestro universitario en esa escuela, y soy el primer egresado de la universidad potosina que llega a gobernador en los últimos cincuenta años.

—¿Cuál fue la fórmula que utilizó para llevar a la entidad de un estado de inquietud y violencia latentes a uno de paz y tranquilidad públicas?

—No se empleó ninguna medida en particular. Se trató de establecer relaciones justas y cordiales con todos los potosinos para merecer su confianza. En primer lugar, no vino nadie de fuera a formar parte de la administración. Todos mis colaboradores ya vivían en el estado. Enseguida formé una comisión de personas significadas y honorables para que vigilaran el manejo de los fondos públicos. A dos años y seis meses de mi administración, no hemos perseguido a nadie y respetamos todas las ideas. Ahora bien, mi gobierno lo integran personas que han pertenecido a diversos grupos políticos; pero cuya eficacia y honradez justifican su colaboración.

Fue la candidatura de Echeverría la que avivó en San Luis, como en otras entidades, la conciencia estudiantil. El rechazo al “asesino de estudiantes” se manifestó con volanteo y pintas en bardas. Rocha delegó en el secretario de Gobierno, Alfonso Lastras, la tarea de inhibir a los “revoltosos” con dulces palabras, sobre todo a los comunistas. En el fondo, Rocha era un gobernador chapado por el diazordacismo, nunca fue amigo de Echeverría, con quien tuvo más de una diferencia cuando éste era secretario de Gobernación y él titular de la PGR. La subversión estudiantil se incubaría en la lucha contra el servicio y alza de la tarifa del transporte urbano, asumió luego banderas de la educación popular y contra el sistema capitalista.

Al rendir en septiembre de 1970 su tercer informe de gobierno, continuó con el paisaje de cantera rosa y, Ernesto Báez Lozano, el diputado encargado de darle la razón con creces. En diciembre Echeverría asumió la presidencia. Tres meses después, el 16 de marzo de 1971 recibió en Palacio Nacional a una comitiva de estudiantes potosinos, encabezada por el gobernador Rocha y el rector Guillermo Medina de los Santos. El

propósito del encuentro, lograr mayor apoyo para la UASLP que pasaba por una situación precaria. “Pronto iré a San Luis Potosí”, les prometió.

Y así fue, llegó el 24 de abril, aunque no hubo ninguna buena noticia para la UASLP. Inauguró la escuela para invidentes Emigdio M. Belloc, la nueva sede del Instituto Potosino de Bellas Artes y la primaria Justa Ledesma. Entre la comitiva brilló el subsecretario de prensa, Fausto Zapata (perfilado para suceder a Rocha). Volvió el presidente en agosto por una emergencia: una enfermedad equina que asolaba el medio rural. Sin haber tenido éxito en sus gestiones, Medina de los Santos concluyó en 1972 su periodo en la rectoría que asume Roberto Leyva Torres y otro Roberto, Naif Kuri, la presidencia de la FUP.

En una entrevista, realizada en noviembre de 1972, por Alberto Barranco de la revista Señal, Rocha evitó hablar del latifundismo, “asunto del gobierno federal”; parecía, escribió el reportero, dictar las respuestas, con sus puntos y comas respectivos.

—¿A qué atribuye el hecho de que en San Luis Potosí no haya habido ningún movimiento estudiantil conflictivo desde hace más de seis años?

—Lo atribuyo a varios factores: al gran sentido de responsabilidad del estudiante potosino; a la rectitud y entrega de quienes han sido sus rectores, y a la abstención de las autoridades para mezclarse o intervenir en su régimen interno. Los estudiantes aquí son estudiosos y trabajadores.

El navismo ya era una columna esencial del orden rochista. La simbiosis tiene su cenit con la creación del Centro de Estudios Históricos y Geográficos Ramón Alcorta en 1972 (el estratega navista falleció dos años antes), en la Casa de la Cultura, dirigida hasta su muerte por Francisco Javier Cossío. El patronato del centro fue presidido por Nava e integrado por otras figuras relevantes de la oposición: Salvador Penilla, Antonio Rosillo, Raúl Cardiel, Horacio Caballero y el citado Cossío²⁰, conuño de Nava.

La leyenda policiaca

Mientras Antonio Rocha destacaba en la política, Rafael, el hermano menor, hizo carrera en la Policía Secreta, comenzó desde abajo, alcanzó la jefatura y el grado de coronel; también fue comandante de la Dirección Federal de Seguridad y director de la Policía Judicial del Distrito Federal con el procurador Ignacio Morales Lechuga.

²⁰ VI Informe de Gobierno, *San Luis Potosí Informa*, núm. 11, septiembre de 1973, p.21.

A los 25 años de edad, con el propósito de convertirse en policía, Rafael dejó la capital potosina y se fue al Distrito Federal; Antonio intentó disuadirlo: “Tú qué sabes de policía, te van a matar”. Obtiene en 1938 un empleo en la Secretaría de Agricultura, donde un año antes Saturnino Cedillo renunció al cargo de ministro cardenista. Logra la ansiada plaza de agente secreto hasta 1945, con la placa número 174, expedida por el jefe de la Policía del Distrito Federal, Ramón Jiménez Delgado, gobernador de San Luis Potosí (1942-1943) que antecedió a Santos.

De acuerdo a unas memorias del coronel, escritas por J. Martín Ponce, hasta ahora inéditas, “en los últimos 50 años, Rafael Rocha Cordero estuvo al frente de casi todos los grandes sucesos policíacos (...) es toda una leyenda (...) Por su voz de mando, lo mismo hacía temblar a agentes y comandantes que al más avezado delincuente”.²¹ Hombre cercano a Miguel Nazar Haro, figura en la lista de responsables de la guerra sucia, al frente de la Brigada Blanca, haciendo mancuerna en 1977 con Francisco Sahagún Baca, en la desaparición de los principales dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que secuestraron al presidente de la Cervecería Modelo, Antonio Fernández.²²

No se ha documentado la participación o relación de *El Gallo* Rafael con los actos represivos en San Luis Potosí durante las décadas de los 60 y 70, pero por la matanza del Jueves de Corpus el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, abrió la averiguación previa PGR/FEMOSPP/11/2002, en la que Rafael aparece como indiciado, junto a Luis de la Barrera, Jesús Miyazawa y Mario Moya Palencia.²³ Al cumplir 85 años, que celebró con una “camada de policías y amigos”, se le ubicó activo en la Agencia Federal de Investigaciones. Murió en el 2003.

Echeverría en la UASLP

Las promesas de ayuda a la UASLP por fin se harían realidad. Echeverría fue el invitado de honor a la celebración del 50 aniversario de la autonomía, en una intensa gira los días ocho y nueve de enero de 1973, acompañado del subsecretario Fausto

²¹ Héctor A. González, “Perfil de Rafael Rocha Cordero. Artífice del servicio secreto”. *La Crisis*, 31 de marzo de 2003.

²² Jesús Ramírez Cuevas, “Liga Comunista 23 de Septiembre. Historia del exterminio”. *Mastosare* (Suplemento de *La Jornada*), núm. 327, 28 de marzo de 2004.

²³ Informe de la FEMOSPP, enero-marzo 2003. El fiscal especial es sobrino-nieto del exgobernador Jorge Prieto Laurens (1923).

Zapata, ya descartado para la gubernatura.²⁴ El secretario de Educación, Víctor Bravo, llegó un día antes para afinar detalles con el rector Leyva y asegurarse de que no hubiera, se dijo bajo cuerda, protestas antiecheverristas, pues a cualquier punto del país al que llegaba, emergía como su sombra la responsabilidad de las matanzas estudiantiles. Las fuerzas vivas lo recibieron en el aeropuerto, había un clima político favorable, las planas de los diarios se plagaron de desplegados de gratitud; se intentaba disipar la malquerencia entre el presidente y el gobernador.

La pretensión del presidente de ganarse la simpatía universitaria es evidente: inauguró la Preparatoria 3; colocó la primera piedra de la secundaria para trabajadores Javier Barros Sierra (el rector de la UNAM que encabezó la marcha silenciosa), promovida por la FUP, y develó una placa con su nombre en el auditorio de la Zona Universitaria; presidió una comida en el Edificio Central; sostuvo un diálogo con estudiantes en el auditorio que pasó a llamarse Rafael Nieto; anunció el decreto expropiatorio del terreno para la construcción de la Escuela de Agronomía y la donación de un particular del terreno para el Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas; en el Teatro de la Paz, en homenaje póstumo, se concedió la medalla al mérito Ildefonso Díaz de León a Nieto y Barros, y atestiguó el nombramiento *honoris causa* de cinco exrectores: Homero Acosta, Ignacio Morones, Jesús N. Noyola, Augusto Díaz Infante y Medina de los Santos.²⁵ La vieja guardia santista en pleno con toga y birrete.

Después del “diálogo abierto” de tres horas que sostuvo con los estudiantes en el Rafael Nieto, “se habló en todos los tonos” y se “hicieron oír jóvenes de todas las ideologías”, Echeverría desplegó su retórica, después tomada al pie de la letra por los estudiantes:

...si no entendemos el instante y la crisis que vive el mundo; si no volvemos la mirada a nuestra historia, para revalorar y reverdecer, todos los días, los afanes de independencia y de justicia, que han motivado nuestro proceso histórico y que nos señalan el camino del porvenir; si nos duele el contraste que hay entre quienes han alcanzando el progreso —y qué bueno que así sea— de la vida industrial y disponen de la seguridad social y de hospitales y de escuelas, y de aquellos otros que viven todavía en condiciones muy desemejantes a las que ha logrado, para algunos sectores, nuestro movimiento social, no cumpliríamos con

²⁴ Zapata perdió en la sucesión de Rocha ante el senador Guillermo Fonseca Alvarez. En una entrevista publicada en *El Universal* el 12 de julio de 1972, luego de haberse reunido con Echeverría, Rocha deslizó al reportero Jorge Coca una lista de nombres entre los que saldría su relevo, en el siguiente orden: Fonseca, Zapata, Medina de los Santos, Florencio Salazar y José Antonio Padilla Segura. Lo que indica que el presidente respetó la decisión de Rocha.

²⁵ *San Luis Potosí Informa*, núm. 3, enero 1973, pp.7 y 12.

los deberes sociales y morales que la Universidad debe provocar en nuestra conciencia.²⁶

El presidente de la FUP, Naif Kuri, en su mejor momento al lado de Echeverría, ya era visto por la izquierda estudiantil como parte de la “efebocracia” sexenal. El rector Leyva, la noche del ocho de enero pronunció un incitante discurso durante la sesión académica “de gala” en el Teatro de la Paz:

La libertad de la Universidad se manifiesta a través de su autonomía. Sólo una universidad libre puede cumplir con autenticidad su cometido. En la Universidad, donde no se da derecho a dudar o a contradecir, no puede anidar el espíritu científico. La autonomía es elemento constitutivo y conceptual de la Universidad. Autonomía es administración libre y voluntaria de los valores del espíritu, sin dogmas, sin consignas; la curiosidad científica y filosófica carece de límites y moldes rígidos y autoritarios. La autonomía es libre pensamiento, es libre exposición de ideas, es controversia, es ejercicio responsable de la inteligencia, es discusión sin tabús (*sic*) de ninguna especie, porque el objetivo de la Universidad será lograr hombres libres en una sociedad libre.²⁷

Desbordada la generosidad de Echeverría, alcanzó al Instituto Tecnológico Regional, con el anuncio de la construcción de la tercera etapa, 200 becas y un aumento del 100 por ciento del subsidio. El líder de la sociedad de alumnos, Isaías Silva, exaltó una personalidad del presidente no muy exacta que digamos:

La juventud de México no hace mucho tiempo perdió la confianza y la fe en sus gobernantes; pero en su persona está volviendo a revivir, porque en usted hemos comprobado que las palabras son acción y trabajo que se convierten en ejemplo, su actitud siempre ansiosa a los problemas de las clases más necesitadas (campesinos y obreros) y su preocupación por las inquietudes de la juventud, lo han identificado con las clases marginadas; por eso ahora el niño, el joven y el trabajador nos acercamos a usted con la confianza que se le tiene a un amigo a estrecharle la mano.²⁸

Como muestra de “la marcha ascendente” de la entidad, también inauguró la secundaria José Ciriaco Cruz, el Centro Escolar Morelos, la Maternidad Noyola y la ampliación de la parte sur del Palacio de Gobierno. La armonía que acogió al presidente se dispararía a su partida: el dolor por el contraste social, el acicate de la conciencia estudiantil al que hizo alusión y el derecho a contradecir, antepuesto por el rector como signo del espíritu libre, sería ejercido por los estudiantes; este “nuevo universitario” (concebido por Alcorta) chocaría con la cerrada estructura de la institución y la callosidad de Rocha.

²⁶ *Ibid.* p.13.

²⁷ *Ibid.* p.23.

²⁸ *ibid.* p. 30.

Enero era apenas el anticipo de lo que vendría después. El día 12, tomó posesión el obispo Ezequiel Perea; el 13, destaparon al senador Fonseca para la gubernatura; el 17, apareció un desplegado del alcalde vallense, Javier Gallegos, en el que responsabilizó al gobernador de un atentado sufrido en septiembre de 1971, y a judiciales por el asesinato de la “persona enterada” de la conspiración, y lo acusó de “interferencia malévola” en el ayuntamiento, la prensa lo trató de “loquito”; y llegaban noticias del conflicto de la UANL, donde se libraba una lucha contra la “santa alianza oligarca”.

En otro desplegado, firmado por Horacio Sánchez, Conchalupe Nava, Fernando Silva, David Ojeda, César Yáñez, Félix Dauajare, Armando Adame, Ignacio y Fernando Betancourt, Roberto Naif, José Miguel Torre, Ruperto Salinas, Enrique Márquez y Sergio Azúa, entre otros, se denunció la cancelación del programa que la Sociedad Literaria Manuel José Othón transmitía por Radio Universidad, cuya dirección lo consideró “ofensivo” y violatorio de la Ley Federal de Radio y Televisión, por leer poemas que hablan de putas que chillan y otras barbaridades lingüísticas.

Un nuevo espíritu estudiantil

Apenas catorce días después de la visita presidencial, estudiantes de Economía, Física y la Preparatoria Nocturna, secuestraron 36 camiones urbanos por el aumento de cinco centavos a la tarifa. Los permisionarios suspendieron el servicio, luego con apoyo policiaco rescataron las unidades en terrenos universitarios. El estudiante de economía, José Luis Sandoval, dirigente del Comité Central de Lucha, después Frente Estudiantil Popular, denunció la violación a la autonomía universitaria. El presidente de la FUP, Naif y consejeros alumnos, la niegan y censuran la conducta de Sandoval por no representar los intereses del estudiantado.

Después en un manifiesto el FEP denunció la intervención del Ejército al patrullar la ciudad el 29 de enero, el mismo día en que se convocó a un mitin, y expuso, entre otros puntos, el rechazo al aumento de la tarifa del transporte, exigió prestaciones y seguro social a los choferes, indemnización a los estudiantes golpeados y concluía con un exhorto que reflejó su orientación ideológica: “Que la organización que necesita el pueblo en estos momentos, es básica para defender las libertades democráticas, para sostener la denuncia contra la explotación y la injusticia, el derecho a organizarse en forma independiente, las luchas económicas, obreras y populares en general”.²⁹

²⁹ Javier Martínez, José Luis Sandoval y Pedro Hernández, *El acecho conservador y el oportunismo político (Derroteros del movimiento estudiantil de la UASLP: 1970-1983)*, San Luis Potosí, 1984, pp.22-

En 1973 no sólo hubo elecciones para gobernador que ganó Fonseca el primero de julio, el 18 de mayo se renovó la presidencia de la FUP. A tono con la lucha de clases y la guerrilla latinoamericana, la planilla color Olivo, encabezada por el barbado Sandoval, ya convertido en algo más que un dolor de cabeza para el rector y el gobernador, presidió la representación estudiantil. Como parte de su campaña distribuyó un documento que tocó partes muy sensibles para la nomenclatura universitaria: impulso a la reforma educativa, control estudiantil de las becas, difusión y redistribución del presupuesto universitario, una librería popular, descentralización de las funciones del Consejo Directivo Universitario, modificaciones al estatuto orgánico, cátedra por oposición, apoyo al proyecto federal de otorgar rango constitucional a la autonomía y participación de estudiantes en la elaboración de los planes de estudio, todo bajo un lema desafiante: “Por una universidad abierta al cambio, contra una sociedad cerrada”.

A juicio del grupo Olivo, la UASLP desde 1964, año en que asumió la rectoría De los Santos, estaba “bajo control directo de los intereses patronales”, este modelo de universidad era irreconciliable con el defendido por los estudiantes que postulaban el “cumplimiento de una función social y política a favor de los explotados de nuestro país”. Si en la segunda mitad de los 50 fueron las autoridades de la UASLP las que impulsaron el cambio social, ahora serían los alumnos con un discurso de corte marxista y de corrientes trotskistas, maoístas y guevaristas, los que intentarían transformar a la institución y sociedad.

El perfil de Sandoval era distinto al de los anteriores presidentes de la FUP: Roberto Naif (71-73), apadrinado por el Centro Patronal (luego Coparmex); Héctor Gerardo Hernández (69-71), de la Corporación de Estudiantes Católicos³⁰ (cuyo lema era *Por Cristo en la Universidad* y su misión expulsar la doctrina marxista de los centros educativos) y Miguel García Atilano (67-69), también afín al Centro Patronal. El nuevo presidente de la FUP asumió una postura “radical”: auditoría a las finanzas de la UASLP, derecho estudiantil a utilizar Radio Universidad, unificación del bachillerato,

23. De este libro proviene gran parte de la información utilizada para este apartado que abarca el fin del sexenio rochista y el inicio del fonsequista.

³⁰ *Corporación de Estudiantes Mexicanos. Presencia y trayectoria*. México, 1964, pp. 31-32. “... se esforzará por penetrar en la esencia y funciones propias de la Universidad. Teniendo en cuenta la tradición secular de la Universidad, la C.E.M. abraza la más íntima convicción de que todo el ser y grandeza de la misma representan la fecunda floración del pensamiento cristiano”. La CEM, con presencia en SLP desde 1955, tenía como guía espiritual al jesuita David Mayaquito, y tuvo en la presidencia nacional a un potosino: Víctor M. Mahbub.

incremento del monto de las becas y nuevas escuelas, por lo que se desata una campaña de la rectoría para “descabezar” a la FUP, sembrando la división en el comité ejecutivo.

Con la agitación estudiantil en la ciudad y la organización campesina en la Huasteca, la preocupación del gobierno estatal contagió al federal, y releva el primero de abril al jefe de la XII Zona Militar, Rodolfo Aceves por el general de brigada Luis Ponce de León. El 22 de julio la rectoría encontró la coyuntura para “asestar el golpe final” a la FUP, que resolvió, para hacer realidad el discurso de vincular a la universidad con el pueblo, solidarizarse con el Campamento Tierra y Libertad, cuyos distintos grupos de campesinos que lo integraban fueron desalojados de los latifundios invadidos.

La autonomía en un autobús

Así, ese domingo 22 en un autobús de la UASLP un grupo de estudiantes, acaudillados por Sandoval, Said López de Olmos y Cruz Elena García Navarrete, se trasladaron a Ciudad Valles donde realizaron un mitin en apoyo a los campesinos. El Ejército tendió un cerco para impedir que éstos se movilizaran, de nada sirvió, el miércoles 25 un grupo de campesinos lograron llegar a la capital potosina con el propósito de emprender una marcha al Distrito Federal, y le solicitaron apoyo a la FUP.

Sandoval le informó al rector Leyva que los campesinos necesitaban alojamiento; la respuesta es positiva y se instalaron en el Edificio Central, mientras se esperaba ayuda del gobernador, que les negaría. Se organizan brigadas estudiantiles que recorren la ciudad para difundir el problema de los campesinos, exigen garantías al gobierno federal para la marcha y el retiro de las fuerzas militares. El jueves 26, después de un mitin que realizan en la plaza de Los Fundadores, un campesino es detenido por la Policía Judicial.

La articulación de los estudiantes con la lucha campesina, alcanzó una magnitud inesperada para el gobierno. Trabajadores electricistas, candelilleros y talladores de ixtle se sumaron al intenso activismo, por lo que la imagen de la ciudad, bajo extrema vigilancia policiaca y militar, desmentía el discurso oficial de la concordia. Una comisión de estudiantes y campesinos, sostiene el viernes 27 un encuentro con Rocha: les negó cualquier ayuda, desconoció el problema agrario con el argumento de que no era de su competencia resolverlo y tampoco dio razón del campesino detenido.

El movimiento entró en crisis cuando el V Regimiento del Ejército de Ciudad Valles bloqueó una marcha de 450 campesinos con rumbo a San Luis. Son detenidos 12 manifestantes, entre ellos el estudiante De Olmos. En tanto, los otros campesinos

estaban virtualmente sitiados en el Edificio Central, pero salen el sábado 28 a realizar un mitin en la calle Hidalgo, unos 200 soldados patrullan la ciudad. Ante el acoso, se decide formar una comisión para que se traslade al Distrito Federal y exponer sus demandas ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y que los demás se regresen a Ciudad Valles. Por la noche son detenidos 28 de ellos en la Central Camionera y la Estación de Ferrocarriles por policías judiciales y son reclusos en la Penitenciaría.

La FUP le solicitó al gobernador libertad de tránsito, y el rector autorizó el uso del autobús para el regreso de los campesinos. El lunes 30, los directores de las escuelas publicaron un desplegado en el que acusan a Sandoval de haber atentado contra la autonomía, de haber afectado la marcha institucional y paralizado las actividades de la UASLP, exigen la intervención del CDU para las sanciones respectivas.

El primero de agosto se reunió el CDU con carácter extraordinario “para tratar el asunto relativo a la invasión de nuestra Universidad por gentes extrañas” y que “fueron llamados y traídos por el señor José Luis Sandoval”. De acuerdo al acta de la sesión, el rector Leyva expuso los hechos y detalló el desempeño del dirigente estudiantil, “al tomar posesión del cargo, salió enseguida un periódico denominado Vanguardia, órgano de prensa de la Federación que mandó hacer en la propia Editorial Universitaria, donde obran ideas que distorsionan los objetivos esenciales de nuestra Casa de Estudios”, lo acusó de utilizar el autobús “para fines totalmente ajenos de la UASLP”, convertirlo en tribuna para que “instaran al pueblo de Valles contra las Autoridades del Departamento Agrario, del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal”, también de introducir a los miembros del Campamento Tierra y Libertad al Edificio Central y de intentar utilizar Radio Universidad “para enviar mensajes subversivos al campesinado y al pueblo en general”.

La defensa fue inútil. Los consejeros invocan el Estatuto Orgánico, votan e imponen a él, a Cruz Elena García y De Olmos, una suspensión de un año. Bastaron 50 minutos para resolver “la violación a la autonomía universitaria”. La FUP pasó al control del vicepresidente Gustavo Rosales López, subordinado “a los intereses de la rectoría y del gobierno del estado”. Ante las protestas estudiantiles y suspensión de clases en algunas escuelas para que fuera revocado el acuerdo del CDU, el 13 de diciembre la Junta de Gobierno resolvió ratificarlo e incurrió en contradicciones, al autorizar a García Navarrete presentar su examen profesional, a Sandoval los exámenes de las materias

que adeudaba y en el caso de Said López, la sanción parecería quedar sin efecto, pues no estaba inscrito como alumno en ese ciclo escolar.

Era a otro tipo de estudiantes a los que el poder apapachaba. A cuatro meses del fin de su mandato, Rocha designó el 15 de mayo como su secretario particular a Fernando Silva, un aplicado estudiante de derecho que inició su carrera política por la puerta grande, mientras otro estudiante de derecho, también con altas calificaciones, Horacio Sánchez, comenzó con menos brillo en un puesto municipal. Al rendir en 1973 su sexto informe ignoró al movimiento estudiantil y sólo de pasada se refirió a las acciones del Campamento Tierra y Libertad: “Las invasiones de tierras fueron excepcionales y encontraron solución adecuada, intensificándose los esfuerzos por lo que toca al problema de ampliación del ejido Los Otates, del municipio de Valles y otros puntos circunvecinos que han requerido especial atención. La Ley Procesal Penal se modificó para que los campesinos que engañados ocuparan tierras sin derecho, pudieran obtener su libertad caucional”.

En la parte final se libró de toda culpa: “En ningún momento autoricé ni ordené procedimientos ilegales y siempre respetamos la vida y la integridad personal. En todo contamos con el apoyo y el respeto del pueblo, con la ayuda de mis colaboradores y de los Presidentes Municipales que destacaron por su labor constructiva y entusiasmo”. En eventos separados, la prensa rindió homenaje al gobernador saliente: el director de *El Heraldito* Mauricio Bercum y el jefe de información de *El Sol*, Juan José Rodríguez, ensalzaron la obra pública y agradecieron el trato recibido.

Con la ayuda de la prensa, Rocha defendió los intereses de la clase dominante ante los estudiantes y campesinos que amenazaron el orden establecido³¹; y el grupo Olivo, en medio de la “descomposición política”, sufrió desprendimientos con la aparición de la planilla Morena y nuevos liderazgos, el de Julio Hernández López y Ricardo Moreno Barajas, entre otros; serían los actores de otro movimiento estudiantil, dando continuidad en distintos grados y formas a la lucha de Sandoval, con un desenlace brutal.

³¹ Pese a la alternancia panista en la gubernatura en el 2003, se reafirmó este viejo modelo priista de prensa subvencionada que censura e inhibe al movimiento social.

Bombas contra la población

Con los conflictos estudiantil y campesino sin resolver, Fonseca asumió la gubernatura el 26 de septiembre de 1973. Político hechura de Rocha, como fiscal federal le tocó aprehender al doctor Nava en 1961; en la conformación del gabinete prolongó al rochismo con una mala señal: la designación del capitán Rogelio Flores Berrones al frente de Policía y Tránsito. Los estudiantes y militantes del PCM lo consideraban un *halcón* del 10 de junio de 1971.

Agrupados en el Frente Popular Estudiantil, la nueva generación de líderes universitarios, con obreros y comunistas, también recurrieron al secuestro de camiones, hacían mítines y se ganaban el apoyo de los sectores populares. El movimiento crecía, el gobierno no encontraba la manera de apagarlo, hasta que el 27 de enero de 1975 en el Centro Histórico estallaron tres bombas, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos. Los dirigentes del FPE son detenidos por Berrones como principales sospechosos y son torturados en el cuartel militar por Miguel Nazar. Los soldados regresaron a las calles.

La noticia de la explosión simultánea de bombas en otras entidades dejaron sin elementos a las autoridades para inculpar a los estudiantes, salieron libres. Los atentados fueron atribuidos a la Unión del Pueblo, que tuvo su origen, al igual que la Liga Comunista 23 de Septiembre y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, en el Frente Estudiantil Revolucionario de la Universidad de Guadalajara, fundado por Andrés Zuno Arce, cuñado del presidente Echeverría, para contrarrestar a la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sobre la UP, fusionada después con el Partido Revolucionario Obrero Clandestino y el Partido de los Pobres, recaía la sospecha de infiltración por la contrainsurgencia. Las bombas eran la especialidad de la UP. Sólo entre 1974 y 1975, se le atribuyen 19 explosiones en Guadalajara, atacando a los símbolos del poder y el capital, en tiendas departamentales, bancos, instalaciones militares, partidistas, oficinas públicas y periódicos.³²

Sofocada la agitación urbana, quedaba pendiente la campesina. El 20 de junio de ese 1975, es asesinado Eusebio García, dirigente del Campamento Tierra y Libertad, se consolidó como un líder huasteco que se extendía al resto del estado. Este hombre era un camarada probado: participó en la lucha de los médicos y durante el 68 se integró al

³² Mónica Ramírez Abundis, *Los setenta: utopía y guerra sucia en Guadalajara*, CUCSH-U.de.G. 2002.

comité de la Facultad de Filosofía y Letras. “A *Chevo* lo mataron en una emboscada tendida por guardias blancas y urdida por terratenientes de la región”.³³

Los vientos de la contracultura setentera soplaron fuerte entre la juventud clasemediera. En la Casa de la Cultura, recinto aristocrático vuelto símbolo del orden rochista, anidó un taller literario coordinado por un comunista exiliado, que forjaría premios nacionales y escribanos de gobernantes; las buenas conciencias se espantaron con este grupo de greñudos rupturistas; al integrarse el exalcalde Dauajare como un poeta más, menguó la inquina de los guardianes del rochismo.

En 1979 Fonseca entregó el poder a Jonguitud, “dirigente vitalicio” del SNTE, y se interrumpió de manera drástica la secuencia rochista. Al enviar a este charro sindical con fama gansteril, al presidente José López Portillo no le importó ni previó los efectos negativos que tendría entre la clase política y grupos económicos. Jonguitud trajo una “legión extranjera”, detuvo el relevo de cuadros políticos, incurrió en corrupción y nepotismo, se solazó con la represión policiaca sin dejar de atender el cacicazgo magisterial; todo esto hizo florecer al navismo de sus cenizas en 1983: Nava vuelve a la presidencia municipal al vencer sin esfuerzo al exrector Leyva; éste no fue el único rochista que cambió de camiseta durante el gobierno de la magisterocracia.

Mientras Jonguitud designó director de relaciones públicas al expresidente de la FUP, Naif, en la Huasteca surgió un nuevo dirigente campesino, Juan José Rodríguez García, del Partido Socialista de los Trabajadores; tenía 29 años cuando el dos de mayo de 1980, de acuerdo a un informe del Comité Eureka que preside Rosario Ibarra:

...fue detenido-desaparecido por agentes judiciales al mando del coronel Rogelio Flores Berrones. Juan José fue sacado violentamente a la 1:30 de la madrugada de su cuarto del Hotel Piña en que se encontraba en Ciudad Valles. Fueron supuestos judiciales que actuaban según declararon después bajo las órdenes del coronel Rogelio Flores Berrones, que era jefe de la Policía Judicial Ganadera en la Zona Huasteca. Los supuestos judiciales Benjamín Sánchez Tovar, Miguel Angel Ventura Serna, Angel Alarcón y Jorge Chávez habrían trasladado a Juan José a una casa propiedad del presidente municipal de Ciudad Valles donde habría sido interrogado por el coronel Flores Berrones. A pesar de que dos de estos judiciales fueron consignados, no se ha esclarecido el paradero de Juan José y se ha obstaculizado la justicia.

Intocable, el gobernador prosiguió con la represión en contra de los campesinos del PST que invadieron tierras en varios municipios. Intentó imponer sucesor, el centro no se lo permitió. El favorecido fue Florencio Salazar, de la vieja guardia rochista-santista,

³³ Agustín Avila Méndez, *Los orígenes del Campamento Tierra y Libertad*, ENAH (tesis), 1981, p.192.

del agrado del navismo, por lo que es apoyado por los sectores distantes del profesor. Para no dejar dudas de su buena voluntad, nombró a Horacio Sánchez, yerno de Nava, titular de Programación y Presupuesto; al discípulo más avanzado de Lastras, Juan Ramiro Robledo, subsecretario de Gobierno y al exdirigente estudiantil Julio Hernández, secretario general del PRI, entre otras designaciones que dieron cohesión, por un tiempo, a la clase política local.

La ruptura rochista

Esta reedición rochista se hizo añicos cuando el primero de enero de 1986 arribó a la presidencia municipal el exrector Medina; el candidato perdedor, Guillermo Pizzuto, era el brazo derecho de Nava. La protesta contra el fraude electoral es reprimida por una confabulación de grupos de poder priista: el palacio municipal envuelto en llamas y el jefe policiaco Julio Ceballos encabezó una gorpiza en la Plaza de Armas, dejando un muerto y varios heridos, lo que dio inicio a otro largo periodo de inestabilidad política.

En una trifulca en la Prepa 1, el nueve de mayo de 1986, es asesinado el estudiante de derecho Jorge Mena, lo que precipitó la caída del rector José de Jesús Rodríguez y el ascenso del diputado Lastras, ya jubilado. A la tensa situación política, se agregó una serie de conflictos carcelarios y fue insostenible la permanencia de Salazar. Lo sustituyó el sobrino de Gonzalo Natividad: Leopoldino Ortiz Santos, tan desinteresado por el poder que lo cedió a los lastristas, una rama dura del rochismo, dedicados a preparar el terreno para la llegada de Fausto Zapata a la gubernatura en 1991. Durante el leopoldinismo los signos de la descomposición rochista fueron tangibles: favoreció con obra pública a sus allegados y un sicario abatió al director de la Penitenciaría, José Luis Vega; también fueron asesinados un hijo del gobernador y el de un empresario hotelero, procesado por delitos contra la salud.

Reportero de la matanza de 1961, aspirante desde 1973, cuadro echeverrista y apadrinado por Manuel Camacho, Zapata ganó las elecciones al mítico Nava, quien confió una segunda vez en la palabra presidencial de respeto al voto. Tan cuestionado fue el triunfo que el gobernador no duró una quincena: la única vez que ingresó al Palacio de Gobierno lo hizo sobre un plantón de mujeres. Esta pugna por el poder terrenal sembró la división en la iglesia católica como en los tiempos del obispo Anaya. El arzobispo Arturo Szymanski dijo que no era Dios para saber si hubo fraude. En cambio, por “obligación moral”, un grupo de sacerdotes y seminaristas, encabezado por el vocero de la diócesis, Darío Pedroza, en una postura contraria a la de su jerarca,

advirtió la “confusión en el pueblo porque los medios de comunicación social presentan un triunfo aplastante” y “la serie de graves anomalías que ponen en tela de juicio la validez del proceso electoral”; a los que actuaron de mala fe y engañaron, les pedían “convertirse y reparar el daño”.

Cuando la marcha de protesta de Nava se acercaba al Distrito Federal, el presidente Carlos Salinas sacrificó a Zapata y envió a Martínez Corbalá, antes vetado por “comunista” (cardenista de origen, embajador en el Chile de Allende y en la Cuba de Castro), para un periodo de 17 meses y convocara a elecciones extraordinarias. Investido como gobernador, los navistas entre la turba le abrieron el paso del Congreso al Palacio.

Esta cohabitación política, similar a la sostenida con Martínez de la Vega, acaba cuando Corbalá tiró la toalla con miras a competir de candidato al mismo cargo en el que dejó al rochista Torres Corzo en una suerte de reelección combatida, ya sin Nava que murió el 18 de mayo de 1992, con banderas maderistas en la Plaza de Armas, lo que frustró el sueño corbalista; se instaló el primer organismo electoral ciudadano del país, reconocido logro navista, para elegir al gobernador del cuatrienio restante. En el PRI se manejaron varios nombres, apareció el menos probable, por el que nadie apostó.

La semilla salinista

La nominación de Sánchez causó desconcierto en el priismo ortodoxo y navismo radical. Por incumplir los requisitos de ley, la candidatura es impugnada por su familia política, que le disputó la gubernatura a través de su suegra Concepción Calvillo. Al principio, se le trató como al otro chihuahuense que gobernó a los potosinos, López Dávila; después, bajo el seductor liderazgo de Conchalupe, la mayoría del navismo se sumó al “proyecto personal” de su marido. Juntos otra vez, navismo y priismo, al rescate del paraíso perdido.

A pesar del discurso de modernidad, el periodo horacista resultó una evocación del santismo con máscara rochista: un gabinete mixto, remozamiento de calles y plazas, y cárcel para viejos comuneros de San Juan de Guadalupe, ambulantes, periodistas, penepedores, barzonistas y perredistas; esa fue su máxima expresión de poder, el encierro, uno de los tres ierros santistas. En el plano ideológico, se arrojó en el liberal Ponciano Arriaga, un defensor de los pobres; empero, se apocó ante un crimen que sacudió a las élites, las mismas que décadas atrás lucharon contra el santismo, exigieron impunidad y se les concedió por sus blasones y devoción marista. Al desnudar este

doblez, el gobernador declaró un boicot a *El Ciudadano Potosino* (“no es un periódico”)³⁴, y el director José Alba publicó un anuncio, como lo hizo en 1955 Loret de Mola en *El Herald*: “Esta publicidad fue cancelada por órdenes del sátrapa”.

En el gobierno de Sánchez ejerció mucha influencia su esposa Conchalupe; se le atribuye el haber traído de su exilio de 20 años al exdirigente estudiantil Sandoval y hacerlo funcionario público; resultó una reivindicación escandalosa para el viejo orden rochista. La utopía de los setenta regresó transfigurada y Lastras, desde su atalaya rectoril, se sintió agraviado, blandió el bastón con furia. La chispa que prendería el fuego: la declaración del estrenado funcionario sobre la “mutilación” que sufrió la UASLP con el cierre de las preparatorias por Lastras.

Con elecciones federales de por medio, la historia de 1973 se repetía de manera grotesca en 1994; desde la rectoría emana una conjura: en un desplegado el CDU respondió contra la “intromisión” de Sandoval; en Economía, el foco de la subversión marxista que desestabilizó al rochismo, tronó un sospechoso petardo y se anima una protesta estudiantil que derivó el 18 de mayo en la quema de 15 camiones urbanos (bandera de Sandoval y compañía en sus mocedades), ante la mirada de azoro del procurador Eduardo Vélez, protegiéndose de la lluvia de piedras que se lanzaban estudiantes, permisionarios y pandilleros, llevados *ex profeso* por subalternos de Lastras a la Zona Universitaria.³⁵

El imperio de la ley desapareció entre las negras columnas de humo que podían ser vistas desde cualquier punto de la ciudad. El gobernador no cayó en la trampa. Ese día, cargado de simbolismo por el segundo aniversario luctuoso de Nava, debía asistir a un acto académico en el escenario del conflicto: a unos cuantos metros giró el volante de su camioneta y se fue a la Sierra de San Miguelito a plantar arbolitos. El presidente de la FUP, Gabriel Purón Cid, pagó los platos rotos con cárcel. Fue la última batalla que dio Lastras, sin fortuna quiso debilitar al gobernador para afianzar a Juan Ramiro Robledo en el proceso sucesorio.

Convertido en la versión doméstica del “villano favorito”, Horacio impuso al compañero que le hizo sombra cuando estudiaban derecho, a Fernando Silva, el inquieto secretario particular de Rocha, y la liviandad de su mandato cerró el ciclo político iniciado en 1967; se fue envuelto en el oprobio con las alforjas llenas; destierro a

³⁴ Lidia Juache y Jesús Ortiz, *La prensa ante el Estado y la sociedad civil: el caso de El Ciudadano*, UASLP (tesis), 1998, p.110.

³⁵ *Metrópolis*, núm. 36, junio de 1994.

cambio de impunidad. Luego de fallidos intentos para designar al candidato a sucederlo (Esteban Moctezuma y Miguel Valladares), rompió lanzas con el dirigente del PRI, Roberto Madrazo, y engendró un cisma partidista, la derrota de Luis García Julián frente al foxista Marcelo de los Santos, un complaciente auditor de las cuentas alegres del rochismo.

II. EL GOBIERNO VINCULO AL FPE CON GRUPOS ARMADOS Y EL ATENTADO

El 27 de enero de 1975 estallaron tres bombas en el centro de la ciudad de San Luis Potosí con un saldo de cinco muertos y más de 30 heridos. El atentado terrorista provocó una escalada represiva del gobierno contra el Frente Popular Estudiantil (FPE), al que se trató de responsabilizar de los hechos para desactivar el movimiento universitario, vinculado a sectores urbanos y campesinos.

Fueron detenidos Julio Hernández López, Carlos López Torres, Jesús Mejía Lira, Ricardo Moreno Barajas, Héctor González Charó, Prisciliano Pérez Anguiano, Antonio Lara Martínez, Alfredo Guzmán Morales, Rosario Valles Velasco, José Antonio Padrón, Ramiro Eduardo Flores y Luis Manuel Barrios.

Gobernaba la entidad Guillermo Fonseca Álvarez; el rector de la UASLP era Roberto *El Chango* Leyva, en las investigaciones y torturas contra algunos de los detenidos participó Miguel Nazar Haro, responsable de la guerra sucia en las décadas de los 60 y 70.

Primero se atribuyó la autoría de los bombazos a la Liga 23 de Septiembre, luego a la Unión de Pueblo que, simultáneamente, hizo estallar otros artefactos en México, Guadalajara y Oaxaca.

Testimonios de algunos de los que fueron detenidos, señalan que la acción terrorista fue obra del Estado.

La preocupación papal

Comenzaba un aciago 1975. En su homilía de año nuevo, Paulo VI, atribulado por la lucha de clases y la guerrilla, reflexionó: “El mundo está retrocediendo a las posiciones

de la dialéctica y polémica que mantenía en la preguerra, lo que significa un mal augurio para la paz” e instó a una reconciliación “a través del amor cristiano”.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aglutinados en el Frente Popular Estudiantil, desde 1974 libraban una lucha en contra del alza a las tarifas del transporte colectivo, secuestraban camiones y amagaban con incendiarlos.

El gobierno tuvo que dar marcha atrás en el incremento. A cada llamado del FPE, que reivindicaba las teorías socialistas del cambio de la sociedad, la plaza de Los Fundadores se llenaba de estudiantes, maestros, obreros y amas de casa.

La inconformidad estudiantil se había extendido a secundarias, la Escuela Normal del Estado, la preparatoria de Ciudad Valles; los ecos del 68 resonaban otra vez en San Luis Potosí, como en el movimiento estudiantil del 71-73 —encabezado por el estudiante de Economía José Luis Sandoval Torres— que fue sofocado con expulsiones, destierros...

La provinciana paz potosina se sentía vulnerada por los “dirigentes rojos”, mientras que la cúpula del movimiento navista se había conciliado con el gobierno desde el sexenio anterior de Antonio Rocha Cordero, incorporándose a los patronatos que realizaron diversas obras públicas.

El gobernador Fonseca había decretado a 1975 como el año de Julián Carrillo, el alcalde Félix Dauajare tenía de funcionarios a los mejores alumnos de Leyes: Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto. En la ciudad los mayoristas encarecían y ocultaban el azúcar, y el cine pornográfico se exhibía en funciones de medianoche.

La sociedad se había sacudido con el asesinato del deportista Luis Federico Vera Fábregat, cometido por un par de borrachos en el restaurante Los Jacales; el espectáculo de *La Tigresa* Irma Serrano causaba escándalo en la feria de Matehuala, y miembros del Campamento Tierra y Libertad invadían los ranchos Los Otates, Crucitas y Puente del Carmen, en la Huasteca.

En una carta dirigida al presidente Luis Echeverría Álvarez y al gobernador Fonseca se denunciaba el secuestro de la licenciada Cruz Elena García Navarrete, exdirigente estudiantil con Sandoval, “por policías estatales y entregada a encapuchados que dijeron ser del Distrito Federal”. Atropellada y vejada, esta mujer fue abandonada en territorio de Nuevo León, “bajo la amenaza de muerte si regresa al estado potosino”.

Mientras esto ocurría en San Luis Potosí, Echeverría daba asilo a los chilenos luego del pinochetazo, y su esposa Esther Zuno, a la cabeza de una misión cultural era

recibida en Cuba por Fidel Castro; y Gerald Ford pedía más ayuda al Congreso estadounidense en la guerra perdida contra Vietnam.

Entonces el comunismo era sinónimo de pecado capital, la guerra fría recorría el mundo...

El mitin premonitorio

El gobernador Fonseca formó una comisión para resolver el conflicto del transporte con el secretario de Gobierno, Juan Antonio Ledesma Zavala, el secretario de Promoción Industrial, Carlos Robles Oyarzun, el diputado federal Angel Rubio Huerta, el alcalde Dauajare, el rector Leyva, el director de Policía y Tránsito, Rogelio Flores Berrones, además de representantes del sector privado, clubes de servicio y la CTM.

Del otro lado estaban los activistas del FPE, el Partido Comunista, ferrocarrileros, electricistas y de la fábrica Atlas. Y la prensa, al tomar partido por el bando oficial, descalifica y amenaza al otro interlocutor; enrarece el ambiente. En su edición del domingo 18 de enero, *El Heraldo* —cuyo director era Mauricio Bercum y el gerente Ramiro de la Colina— publicó en la columna Línea Privada, sin firma, un mensaje muy claro:

Parece que fuerzas extrañas están tratando de convertir a SLP en un estado conflictivo. Se aprovecha cualquier motivo para crear problemas, sobre todo aquellos relacionados con campesinos y el sector estudiantil (...) El gobierno hasta el momento no ha recurrido a medios drásticos para evitar esos conflictos y ha guardado la serenidad necesaria ante las provocaciones y atentados al orden, como ocurrió en pasados días en que secuestraron unidades del transporte urbano por elementos del FPE, que es un organismo que de ninguna manera representa los intereses del sector estudiantil organizado.

Sin embargo, Fonseca se echó para atrás en el incremento tarifario. El FPE realizó un mitin el 26 de enero en la explanada del Mercado Revolución que pretendió ser disuelto por un grupo de golpadores, enviado por los permisionarios. Algunos dirigentes tuvieron que irse escoltados por ferrocarrileros y ocultarse en las casas de éstos.

Los golpadores distribuyeron volantes en los que atacaban al FPE de comunista y de atentar contra los valores de los potosinos.

Las bombas en Sears, Banamex y pasaje Hidalgo

En Plaza de Armas y pasaje Zaragoza, la madrugada del lunes 27 el velador de *Sears*, Hipólito Mata García, de 58 años, envuelto en su cobija, se durmió para siempre. A las 3:20 horas se escuchó una fuerte explosión. Los vidrios de la tienda departamental y del edificio San Rafael se hicieron añicos. La noche se acortó.

La ciudad despertaba. Pocos sabían de lo ocurrido.

El barrendero Maurilio Mata Uribe, de 55 años, comenzó sus labores, y en el pasaje Hidalgo, frente a *Woolworth*, se agachó para recoger una caja de cartón que echó en su carrito sin descubrir su contenido. Al llegar al pasaje Arista una segunda bomba explotó y el cuerpo del empleado municipal voló en pedazos. Eran las 8:50 de la mañana. Y los heridos fueron Ernesto López Cerda, Pedro Montalvo, Alfonso Martínez, Marcelino Cedillo y Beatriz Eugenia Silva.

Casi cuatro horas después, a las 12:50, estalló la tercera bomba afuera de *Banamex*, ubicado en Allende y Obregón. De acuerdo a las notas de los periódicos *El Heraldo* y *El Sol de San Luis*, murieron tres personas: Pablo Villa Morales, de 70 años, José Gómez Muñiz, de 60, y Angel Mendoza Posada, de 16. Daños materiales sin cuantificar. El aspecto del Centro Histórico era desolador.

Hubo 19 heridos: José Angel Barrios Rodríguez, Alejandro Romero, Carlos Castillo Robles, Francisco Mora, Genaro Ortega, Cirilo Rodríguez, Paula Acosta, José Ojeda, Cruz Segura, Cecilio Tirado, María del Carmen Elías, José Luis Gutiérrez, Guadalupe Romero, Soledad Padilla, Antonio Isidro Quevedo, Víctor Martínez Dávila, Jesús Campos Amaya, Ana María Cháirez Grimaldo y Francisco Javier Correa.

El pánico, el miedo, la persecución

A la una de la tarde la mayoría de los comercios habían cerrado. La circulación vehicular estaba “colapsada” y el servicio telefónico suspendido. El Ejército asumió el control e instaló retenes carreteros en las salidas de la ciudad.

El pánico crecía con una serie de llamadas anónimas que avisaban de otras bombas que estaban por estallar. La policía informó haber encontrado tres: en el Cine Othón, café Versailles y Catastro. El capitán de la Judicial del Estado, Luis Salgado Aguillón, declaró que “aproximadamente 140 agentes de esa corporación y la Procuraduría fueron movilizados para capturar a los presuntos responsables...”, e hizo traer a su homólogo de Querétaro, Miguel Roncal González, “experto en bombas, llegó a San Luis para colaborar en las investigaciones”.

El jefe de la XII Zona Militar, Luis Ponce de León Tirado, declaró: “Lamento que humildes hogares potosinos se hayan enlutado con los atentados terroristas (...) que pretenden socavar la paz y el orden público en San Luis Potosí”.

Mientras el gobernador Fonseca declaraba que no sería débil, pero tampoco emprendería una cacería de brujas, el capitán-coronel Rogelio Berrones, jefe de Policía y Tránsito, y el capitán Salgado ya habían iniciado la suya con la detención de varios de los dirigentes del FPE. Horas después llegaría el subdirector de Seguridad Federal, el temible Miguel Nazar Haro.

Los estudiantes “terroristas”

La noche de ese lunes 27 de enero, en Palacio de Gobierno el procurador de Justicia, Horacio Ramírez Sornoza, le informó al gobernador Guillermo Fonseca Alvarez de la detención de los líderes del FPE, PCM, PPS, de sinarquistas y rieleros.

Héctor González Charó, Jesús Mejía Lira, Julio Hernández, Ricardo Moreno, Rosario Valles, Prisciliano Pérez, Alfonso Guzmán Morales, Carlos López Torres, Ramiro Eduardo Flores, Luis Manuel Barrios y José Antonio Padrón.

El gobernador y el procurador ya estaban enterados de los “atentados simultáneos en el Distrito Federal y Oaxaca”. Una nota nacional de *El Herald*o, en su edición del 28 de enero, informó que “cientos de agentes policiacos buscaban en la capital del país y en otras entidades a los responsables intelectuales y materiales de una serie de petardos que han estallado en el curso de esta madrugada y hasta el mediodía”.

La versión oficial que recogió ese matutino señala como responsable de los atentados a la Liga Comunista 23 de Septiembre, que lo hizo “para conmemorar el aniversario de la muerte de uno de sus líderes, Raúl Liévano”.

La información de *El Sol de San Luis* del 28 de enero, redactada por Rodolfo Franco y Juan Antonio Hernández Varela, comienza así:

La tranquilidad de San Luis Potosí fue quebrantada ayer violentamente por una emboscada ofensiva terrorista que consumó tres explosiones dinamiteras en otros tantos edificios del corazón de la ciudad, dejando un saldo de cinco muertos y 33 heridos, ocho de ellos sumamente graves; daños materiales incalculables y una psicosis de pánico colectivo.

La nota de los reporteros de *El Herald*o, Sergio López y Rafael Ibarra indicaba: “En los tres atentados terroristas: 5 muertos y más de 20 heridos”. Los sumarios: “Detienen

a dirigentes rojos” y “La ciudad vuelve a la vida hoy”. La breve entrada: “Tres atentados terroristas enlutaron a San Luis Potosí e interrumpieron la tranquilidad de la ciudad en la mañana de ayer”.

El paradero de la mayoría de los detenidos se desconocía. La sicosis dominaba a la gente. Continuaban las llamadas anónimas sobre supuestas bombas, las autoridades recomendaban a la población no recoger cajas o paquetes en la vía pública, a los comerciantes que abrieran sus establecimientos. Soldados vigilaban la ciudad.

La juventud sin Dios

El presidente de la FUP, Gustavo Rosales pidió al procurador Ramírez Sornoza la libertad de Jesús Mejía Lira. El dirigente de la sección 26 del SNTE, Helios Barragán, exigió un “trato justo” para Carlos López. El gobernador recibió múltiples quejas por las arbitrariedades cometidas en las detenciones de los líderes, y se excusó: “Mis instrucciones son de que se actúe de acuerdo con la ley”.

El objetivo del gobierno estatal se había logrado. Los dirigentes del FPE fueron exhibidos como ligados a organizaciones subversivas que se empezaban a mencionar como responsables de los atentados.

La repulsa tanto local como nacional fue unánime. El dirigente estatal del PAN, Alvaro Elías Loredó, condenó los “bárbaros atentados dinamiteros” en un boletín:

...así sólo obran los cobardes asesinos o los esquizofrénicos... Confiamos, por otra parte, que en la persecución de los responsables de los atentados terroristas que, repetimos, somos los primeros en condenar y repudiar, no se vaya a desatar una cacería de brujas aprehendiendo a inocentes que a la policía, no siempre eficiente ni eficaz, le parezcan sospechosos y les arranquen confesiones, para cubrir el expediente. Debe tratar de encontrarse a los verdaderos autores materiales e intelectuales de esta ola de terror que va invadiendo a México.

Salomón H. Rangel, “la voz que clama en el desierto”, sinarquista de toda la vida, con un intermedio navista y luego panista, “preocupado y conmovido por los muy lamentables sucesos ocurridos en nuestra apacible ciudad”, en una carta publicada en *El Sol* manifestó su postura:

En mi opinión personal, el problema de la delincuencia está en la educación sin Dios y en la injusticia social, pues no creo que los autores de los atentados dinamiteros sufridos en nuestra ciudad, sean franciscanos, dominicos o redentoristas. Son socialistas, marxistas o ateos. Son gente sin moral o sin religión. Son jóvenes desorientados, que tienen como ídolos o héroes a Mao, al Che Guevara, a Salvador Allende, a Fidel Castro. La juventud sin Dios, es como un caballo sin freno, se desboca (...) Cada potosino debe convertirse en un

guardia de la comunidad. Debe reportar a la autoridad cualquier movimiento sospechoso que note en una persona. Debe vencer el miedo.

Las fuerzas oscuras

El mismo martes 28, en el Panteón de Dolores, en la ciudad de México, poco antes de que los restos del músico de Ahualulco, Julián Carrillo, fueran trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, dijo que “el terrorismo es un procedimiento contrarrevolucionario que sólo emplean quienes están manejados por las fuerzas más oscuras y represivas”.

Augusto Gómez Villanueva, secretario de la Reforma Agraria, también aportó su definición del terrorismo, “sólo busca la confusión en la que moran los incapaces y los que tienen causas oscuras que esconder”. No se quedó atrás el PRI, dirigido por Jesús Reyes Heróles, establece en un comunicado de prensa:

Son grupúsculos que pretenden deteriorar la imagen del gobierno y operan en la clandestinidad como resultado del aislamiento y fracaso, pretendiendo por medio de la intransigencia y la violencia, poner en peligro a la sociedad entera.

Eran los tiempos de la coincidencia. Los senadores priistas Juan Sábines, Salvador Gámiz y Corona del Rosal, consideraron que los “atentados dinamiteros son actos contrarrevolucionarios, respuestas enfermizas y desesperación de impotentes...”

Consternada, la Confederación Nacional Campesina condenó los hechos, “no tienen ninguna justificación, cuando la Presidencia de la República, el Poder Judicial y las cámaras legislativas están más abiertas que nunca al diálogo”.

El teniente Gabriel Lomelín Tenorio, del departamento de Materiales de Guerra, hizo el peritaje de las bombas:

Los artefactos son de fabricación casera, en técnica nacional. Se usó el sistema de ‘ruptura’. Respecto a las otras tres bombas encontradas, fueron desactivadas afuera de la ciudad, su fuerza hubiera causado destrucción en unos cien metros a la redonda.

Mientras el comandante de la XII Zona Militar, Ponce de León, indicó que fueron elaboradas a base de:

...sustancias químicas accionadas con ácido, y descartó la versión de que hayan sido bombas de tiempo, al no encontrarse mecanismos o relojes usuales en estas explosiones. Hasta que no se restablezca totalmente la calma, el Ejército retirará la vigilancia de la ciudad a base de patrullas motorizadas. Según el peritaje hecho a las bombas que estallaron en la ciudad de México arrojó que fue usada

una sustancia de alto poder, llamada Amatol, que nunca antes había sido hallada en explosiones anteriores.

Las fuerzas vivas

Para demostrar que la tranquilidad había vuelto a San Luis Potosí, el gobernador Fonseca y el alcalde Dauajare recorrieron el centro de la ciudad. Se detuvieron a platicar con transeúntes, se metieron a comercios para hablar con sus propietarios.

La tarde del 30 de enero, bajo una fuerte y pertinaz lluvia, las fuerzas vivas acudieron a un mitin “antiterrorista” en la plazoleta de El Carmen, con el lema Alianza Popular. En el templete estuvieron el gobernador, el alcalde, el comandante militar, representantes de los sectores privado, obrero y campesino. No dejaba de llover. La lista de oradores: el presidente de la Asociación de Abogados, Salvador Pedroza, por los empresarios habló Joseph Vilet Compeán y por los campesinos Porfirio Rosales.

Un desplegado de media plana publicado en *El Herald* el primero de febrero, suscrito por los alcaldes de Matehuala, Villa de Guadalupe, Real de Catorce, Villa de la Paz, Cedral y Vanegas, decía:

Miles de potosinos tributaron el más decidido apoyo y solidaridad al presidente Luis Echeverría Álvarez y al gobernador Guillermo Fonseca Álvarez (...) Al mismo tiempo manifiestan su repudio y condenación total contra la violencia y terrorismo desatado en perjuicio de seres inocentes, por considerar que de ninguna manera pueden aceptarse como formas de manifestar ninguna inconformidad, en un régimen de derecho en el que siempre ha estado abierta de par en par la puerta del diálogo franco y sincero.

El contacto con la subversión

El procurador Horacio Ramírez, el mismo día del mitin, en conferencia de prensa señaló a “Edgar Nelson Reyes Palomino como presunto autor intelectual y material del estallamiento de las bombas del lunes 27”. Según las investigaciones de Miguel Nazar Haro, subdirector de la Federal de Seguridad, Nelson estuvo en 1972 en un campo de entrenamiento y experimental de explosivos en Michoacán. En 1968 colocó bombas en Morelia”.

Mencionó como “compinches” de Nelson a los potosinos Francisco Márquez Guzmán, José Luis Alvarado Martínez y José Luis Andalón Valle, “coaligados al grupo Lacandones y a la Liga 23 de Septiembre”, no estaba confirmada su participación “pero sí están fichados por la Dirección Federal de Seguridad”.

De acuerdo al avance de las investigaciones, eran “corresponsables de la acción terrorista, Jesús Mejía Lira, Héctor González Charó, Carlos López Torres y Moreno Barajas”.

El procurador explicó que ellos “tuvieron contacto con este terrorista (Nelson) que se registró con el nombre de licenciado Osorio en el hotel Guadalajara (ubicado en la zona roja), junto con otro individuo. Se presume que llegaron a la ciudad en dos Volkswagen”.

“En coordinación” con Nazar Haro, la PGR y la Segob, el procurador, seguía con las elucubraciones para incriminar a la dirigencia del FPE de la autoría de los tres bombazos. Sin empacho, dijo que “están trabajando muy bien y si hubo algunos abusos no fue culpa nuestra”, y dio a conocer la versión de que empleados del hotel Guadalajara “reconocieron en una foto a Nelson, quien se entrevistó con jóvenes de la localidad, al parecer estudiantes”.

Desde diciembre de 1974, narró en conferencia de prensa, “la policía tuvo conocimiento de que se formaban grupos que incitaban a la violencia e inclusive a tomar las armas”, y concluyó que cinco, de los dieciséis detenidos en San Luis Potosí, tuvieron alguna participación en los atentados y serán consignados por los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena por explosión, robo de uso y daño en propiedad ajena, al ser acusados también de secuestrar y desmantelar 23 camiones”.

Satisfecho por el respaldo de las fuerzas vivas, el gobernador Fonseca no atendió los reclamos y quejas de los parientes de los detenidos. Insistía en que las investigaciones se hacían conforme a derecho, y salvaguardar la paz pública era su mayor desvelo. Aunque en los hechos él dejó de gobernar. Su presencia en palacio era un formulismo: el poder estaba en manos del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad.

Presos los estudiantes “subversivos”, ya enjuiciados por la prensa y reprimidos por la policía, con soldados recorriendo las calles, el gobierno inhibió toda protesta estudiantil. Ya no habría más secuestros de camiones, ni mítines en Fundadores con arengas a favor de una educación popular y una sociedad sin explotadores.

El gobierno mostró la eficacia de la represión. El movimiento estudiantil fue destruido.

La imagen del 27 del enero de 1975 no se ha borrado, permanece: cadáveres, vidrios por todas partes, sangre en las paredes y piso, bolsas, zapatos y sombreros tirados, señoras con sus hijos refugiándose en la Catedral. Llanto. Humo denso, grisáceo, flotando en un aire de confusión, de miedo.

Libres por falta de pruebas

Mientras los líderes del FPE eran consignados, el ayuntamiento capitalino rendía homenaje a Julián Carrillo, en la colonia Centenario que cedía su nombre al creador del Sonido 13. En la pérgola de la plaza, Fernando Silva Nieto y Carlos Ramírez Muñoz Ledo se encargaban de los discursos laudatorios.

La policía terminó por reconocer que “no hay pruebas contra los cinco jóvenes del FPE detenidos, sino únicamente el antecedente de que participaron en un movimiento para impedir el alza de tarifa del transporte (...) También tienen la de que simpatizan con el socialismo”.

El procurador Ramírez ya no pudo sostener por más tiempo la hipótesis de que los líderes del FPE estaban involucrados en los bombazos, “al profundizar en las investigaciones, se ha comprobado que fueron ajenos a los sucesos”, aunque aclaró, “siguen en pie las denuncias contra cuatro estudiantes por el secuestro y daño a camiones ocurrido el siete de enero”.

Explicó que “la pista de presunta relación de los detenidos con Nelson se desvaneció cuando no se comprobó lo dicho ni la identidad de Reynaldo Hernández y Roberto Gómez Leyva, que estaban hospedados en el hotel Guadalajara, dijeron haber visto a Nelson con varios estudiantes, no fueron conocidos en Loma Bonita, Oaxaca, como habían dicho”.

El juez Gerardo Castillo Marroquín, dejó en libertad a Carlos López Torres, quien había sido torturado, y decretó auto de formal prisión a Julio Hernández, Jesús Mejía Lira, Héctor González y Ricardo Moreno, sólo por los delitos de robo de uso. Poco después, salieron libres bajo fianza.

Como si no hubiera pasado nada, el lunes tres de febrero los concesionarios del transporte urbano, seguros de que ya nadie les secuestraría sus camiones, sin autorización subieron a 80 y 40 centavos las tarifas.

Volvió a aparecer el capitán-coronel Rogelio Flores Berrones. Ahora para intimidar a los camioneros que optaron por suspender el servicio. Les advirtió que se les impondrían multas de 10 mil pesos y se cancelarían las concesiones. El gobierno

habilitó un servicio emergente de transporte, luego de varias reuniones se logró un acuerdo y se reanudó el servicio.

El martes cuatro de febrero, en su despacho Fonseca leyó un boletín de la DFS, en el que se indicó que los atentados fueron cometidos por el grupo subversivo Unión del Pueblo, que ejecutó los estallidos el mismo día en el Distrito Federal. Dio un perfil de la organización: “Se formó en 1971 y es responsable de atentados a empresas y oficinas públicas desde 1972. Colocan bombas para causar daños a la ‘economía burguesa’, ‘hostigar al gobierno’ y ‘crear conciencia en el pueblo’”.

El líder de la Unión del Pueblo, Heladio Hernández Castillo, alias *El Pelón*, “dirigió la acción en San Luis Potosí para conmemorar la muerte de Luis Jorge Meléndez Luevano, también lo hizo en Oaxaca y el Distrito Federal, y por *sorteo* le tocó a San Luis Potosí”.

En la colonia Cuchillo del Tesoro, en el Distrito Federal, “fueron detenidos algunos miembros de la UP, que confesaron haber puesto las bombas: Raymundo Hernández Castillo, Romeo Valentín Maldonado, Nicéforo Urbieta Morales, Rosa Elena Guerrero, Jesús Enrique Santos, René Arizmendi Villalobos, entre otros”.

Socialismo y degeneración sexual

A mediados de febrero de 1975, la polémica sobre los libros de texto gratuito estaba en su clímax. El ingeniero Francisco Xavier Salazar Sáenz, presidente de la Unión de Padres de Familia (años después se sabría de su pertenencia a *El Yunke*, organización clandestina de ultraderecha), publicó un desplegado de una plana en *El Sol* dirigido a los “padres patrióticos”.

Salazar expresaba su rechazo a los libros de texto y guías didácticas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Al primero por señalar que “la masturbación es enteramente normal y no promueve trastornos”, cuando la reproducción en el hombre, a juicio del panista, “debe ser regida por el amor”. Del segundo libro, consideró que “exalta al socialismo y tiende a destruir cualquier régimen de propiedad privada, incita la lucha de clases y justifica la violencia”.

No tardó en responder el SNTE ya en poder de Carlos Jonguitud Barrios, futuro gobernador, calificó de “fuerzas oscurantistas a quienes se escandalizan de los fenómenos de la naturaleza y pretenden que se oculten los cambios sociales en el

mundo”. Refrendó su apoyo a Echeverría, por su “política nacionalista contra la injusticia y la marginación”.

Habla el hijo de una sexta víctima

Don Juan Zarazúa López, de 60 años, acudió como cada mes a cobrar la pensión de su hermana a Banamex. Apenas entraba al banco cuando estalló la tercera bomba el 27 de enero.

Oriundo de Mexquitic de Carmona, vivía en el barrio de Santiago, se dedicaba a la agricultura. En los años 20 y 30 fue seguidor de Aurelio Manrique; se integró a la lucha navista en el 58 y 61, y por una paradoja de la vida, “murió a causa de una supuesta acción revolucionaria”, afirma su hijo José E. Zarazúa Zapata.

“Mi padre –dice– fue identificado la noche del 27 de enero, en el Servicio Médico Forense, por una credencial que usaba para cobrar la pensión de mi tía. Al verlo me di cuenta que tenía destrozada la espalda. Si hubo cinco muertos reconocidos oficialmente, mi padre fue el sexto”.

La autoridad se comprometió a pagar los gastos funerarios y a subvencionar la educación de los hijos de las víctimas, “me mandaron con el tesorero municipal, Jesús González, un hombre indolente y sin principios que al enseñarle la nota de la funeraria, me preguntó: ‘Tanto valía el muertito’”.

Zarazúa apunta que “posiblemente hubo una mano siniestra de alguien que estaba en el gobierno de Guillermo Fonseca Alvarez; no tengo los elementos suficientes para mencionar nombres, pero hay varias cosas aun pendientes de esclarecer”.

Exige al gobierno del estado la reapertura de la investigación para dar con los verdaderos responsables, pese a que los delitos hayan prescrito. Coincide en que el triple atentado tuvo como propósito desactivar el movimiento estudiantil, “infundir miedo y terror entre los potosinos y desacreditar a los dirigentes estudiantiles, pero a un elevado costo que dejó a varias familias sin padre, sin hermano”.

(El Ciudadano Potosino, 27 de enero de 1995)

TESTIMONIOS

**DIRIGENTES DEL FRENTE POPULAR ESTUDIANTIL
Y PARTIDO COMUNISTA MEXICANO**

III. CON LAS BOMBAS, EL GOBIERNO DESACTIVO EL MOVIMIENTO: CARLOS LOPEZ TORRES

Encarcelado y torturado por Miguel Nazar Haro. Al replegarse el navismo durante el gobierno rochista, la masa popular vio cancelado el ejercicio de su voluntad, afirma el profesor López Torres. El exgobernador Guillermo Fonseca fue un represor y es el responsable histórico del atentado terrorista, y el jefe policiaco Flores Berrones, ligado a los bombazos, acusa. El transporte urbano, el origen de la lucha estudiantil que se articuló a las demandas obreras y campesinas. El FPE era un interlocutor de otro signo que no podían controlar con patronatos, el gobierno fue rebasado por la izquierda.

A las 10 de la mañana del lunes 27 de enero de 1975, Carlos López Torres estaba en la escuela Manuel López Dávila, cuando un grupo de policías judiciales, encabezado por Héctor del Castillo Chagoya, sin orden de aprehensión, lo detuvieron a golpes y mentadas de madre.

Con una pistola sobre el estómago, el profesor de educación primaria ya no opuso resistencia. Lo llevaron al Charco Verde, lo encerraron en una celda pequeña, oscura, fría y maloliente. Lo sacan media hora después con los ojos vendados y lo suben a un automóvil.

—A ver si es cierto que muy machito, pinche comunista. En los mítines te das vuelo contra el gobierno— me decían mientras me jalaban los cabellos, refiere Carlos que en ese entonces tenía 34 años y por su militancia en el Partido Comunista, se veía obligado a llevar una vida semi clandestina.

En el auto se da cuenta que va con otros dos detenidos: el dirigente comunista Prisciliano Pérez y el estudiante Julio Hernández.

–Julio me toca con el codo, y me pregunta ¿quién eres?, ¿quién eres? No le contesté. Lo hizo Prisciliano. Yo seguí en silencio. Pasa el tiempo. El auto se detiene. Nos bajan y no sabemos dónde estamos. Me llevan por unas escaleras. Oigo que se abre una reja y una voz me grita:

–Desnúdate, ahora vas a ver lo que hacemos a los comunistas como tú– obedezco y tiro la ropa al suelo. Me cogen de las manos y me las amarran por detrás y empiezan a golpearme en el estómago, patadas, rodillazos en los muslos, pisotones; cada vez que me caía, me levantaban de la barba, de los cabellos.

El torturador Nassar

Me preguntaban qué relación tenía con grupos guerrilleros, básicamente con la Liga 23 de Septiembre. Rechacé de manera rotunda cualquier relación. Lo que no negué frente a mis torturadores fueron mis discursos contra el gobierno, lo que provocó más enojo.

–Orita vas a ver, te vamos a dar en serio, y vas a cantar todo lo que sabes comunista infeliz, ¿quién puso las bombas?

Carlos es sometido a otra sesión de tortura, ahora con una picana eléctrica, se la aplican en los testículos, en el ano, atrás de las orejas, combinada con golpes en todo el cuerpo. A la tortura física siguió la mental.

–Allá afuera está tu familia. Le puede pasar lo mismo que a ti o algo peor –me amenazaron, por fortuna, nadie de mi familia fue detenido. La evocación la hace en una mesa del café Concordia, mientras bebe un *vodka tonic*.

Después supe que el entonces *subdirector* de la DFS, Nazar Haro, es el que juega el papel fundamental en las investigaciones como torturador, enviado por Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación. Nazar Haro sabía que los dirigentes del FPE detenidos, nada tenían que ver con la guerrilla, lo cual disminuyó la intervención de Moya Palencia y dejó todo en manos de las autoridades locales.

Las campanas del Santuario

Me siguieron golpeando. Escuchaba gritos de los otros compañeros detenidos. Perdí la noción del tiempo. Finalmente nos sacaron vendados de la reclusión clandestina y nos llevaron a *tocar piano* (registro de las huellas dactilares) a la Procuraduría de Justicia, nos regresan al Charco Verde, donde casi me caigo, no podía sostenerme. Ningún

médico me revisó. Los judiciales nos amenazaron con llevarnos al Campo Militar Número Uno. No dudamos que ese podría ser nuestro destino final.

Al término de las 72 horas nos permitieron ver a nuestros familiares. Nos enteramos del sucio manejo periodístico y que seríamos consignados.

Nos llevaron a la Penitenciaría de la avenida Juárez. Nos encerraron una semana, al menos yo, Julio (Hernández) estuvo más tiempo. El miedo no nos abandonó en prisión, pensábamos que hasta allí nos alcanzaría la represión. Después de la tortura, piensas lo peor.

En nuestras celdas llegamos a la conclusión de que nos habían torturado en la Zona Militar, en los calabozos que están en el sótano, donde castigan a los soldados. El tañido de las campanas del Santuario fue el referente para ubicarnos y confirmar que habíamos estado con los militares.

Afuera, el movimiento estudiantil –agrega– se mantuvo para exigir nuestra libertad, y hubo respuesta incluso nacional: de la UNAM, la UAG, en fin. La gente nunca creyó que nosotros pusimos las bombas, se dio cuenta que era una provocación para justificar la represión del gobierno. La duda era quién había puesto las bombas.

Oficialmente se atribuyó la autoría a la Unión del Pueblo (que luego se fusionaría en el PROCUP-PDLP), entre otras razones porque el mismo día que en San Luis Potosí estallaron otras en Oaxaca, Distrito Federal y Guadalajara, y esa organización las reivindicó en memoria de un compañero muerto.

Yo tenía mis dudas, sospechaba que de alguna manera los *Halcones* que comandaba el capitán del Ejército, Rogelio Flores Berrones, no eran ajenos a las bombas, y sabemos que él formó parte de ese grupo represivo, se trajo a varios de México y aquí reclutó a otros. Los estrenaba en un gimnasio que estaba a un costado de la iglesia de San Sebastián, sobre Constitución, hoy es un jardín de niños. Y si no fueron ellos los que pusieron las bombas, sí un grupo ligado a ellos.

Entonces López Torres era el coordinador nacional de la comisión estudiantil de la Coordinadora de la Escuela Normal Superior de México, que agrupaba a cinco mil profesores de los cursos de verano, es el antecedente de la CNTE.

Mi detención, recuerda, provocó una lluvia de telegramas exigiendo mi libertad, lo que obliga al SNTE, ya dirigido por Carlos Jonguitud Barrios, a intervenir a través de la sección 26 con Helios Barragán, Refugio Araujo del Angel y Antonio Almazán Cadena, pidieron a las autoridades que fuera tratado con justicia. El interés de Jonguitud era muy claro: sucedió en la gubernatura a Guillermo Fonseca.

El repliegue navista

La biografía de López Torres, oriundo de Saltillo, consigna que ha sido diputado local por el PCM, excandidato a alcalde y gobernador, directivo del PCM, PSUM y PRD. Estuvo en países europeos, obtuvo un “diplomado clandestino” por el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú. En la actualidad está jubilado como inspector de educación especial.

Pide otro *vodka tonic*. Por la calle de Los Bravo pasa una marcha de panistas de Ciudad Fernández que corean: “¡Qué se vaya, qué se vaya!”, se refieren al gobernador Horacio Sánchez Unzueta.

López afirma que, de manera simultánea a la lucha estudiantil, estaba el movimiento campesino en su apogeo. En Los Otates se había creado el Campamento Tierra y Libertad, dirigido por Eusebio García, con quien tenía amistad, después fue asesinado por guardias blancas. Era simpatizante del PCM, habíamos colaborado juntos en el Frente Sindical Independiente, yo en San Luis y él en Ciudad Valles.

En su visión, ese movimiento campesino ha sido el más importante en contra del latifundismo y cacicazgos en la Huasteca. Surgió en una época en que el santismo estaba vigente y miles de campesinos tomaron tierras.

Un antecedente del movimiento del FPE, es el repliegue del navismo a principios de los 60 luego de la feroz represión, y el posterior ascenso a la gubernatura de Antonio Rocha Cordero, quien logró conciliar a los diferentes sectores sociales y fuerzas políticas que habían participado en el navismo: clases medias, medianos y prominentes empresarios que se sentían excluidos de un proyecto de desarrollo económico, y no eran tomados en cuenta por el centro.

La estrategia de Rocha fue crear patronatos, en los que se dio cabida a navistas, se concerta, se vuelven condescendientes con el gobierno del estado, y la gran masa compuesta por trabajadores del Ferrocarril, mineros, de la España Industrial y la fábrica Atlas, que eran el sustento popular del navismo, vio cancelada sus posibilidades de ejercer su voluntad, del respeto al voto y de avanzar en la democratización.

En 1973, se dio una lucha estudiantil y popular muy importante –en contra del aumento a la tarifa del transporte– a través del Comité Central de Lucha de la Escuela de Economía, del cual era secretario general José Luis Sandoval Torres. Se incorporan activistas universitarios que respondieron de alguna manera con cierto rezago al movimiento de octubre del 68 y al Jueves de Corpus del 71, conmemoraban ambas fechas.

La paz rochista se resquebraja por la amenaza roja representada por el movimiento estudiantil.

Es la marca de mi vida

Las protestas, “obligaron al gobernador Antonio Rocha Cordero a sacar el Ejército a la calle, a presionar, a perseguir a varias personas, entre ellas yo, y tuve que irme a México por un tiempo. Habíamos propuesto un diálogo público con Rocha Cordero en Fundadores para debatir el problema del transporte urbano. Hubo un grupo que propuso el secuestro y quema de camiones, uno cada 24 horas, en caso que no se diera el diálogo”.

Ese grupo, precisa, no pertenecía al PCM. Estaba identificado con la izquierda radical, lo encabezaban Saíd López de Olmos y Cruz Elena García Navarrete. Convenimos hacer un mitin, aunque no hubiera diálogo con el gobierno, después de discutir la propuesta del secuestro y la quema de camiones, fue suficiente para que Rocha se espantara y recurriera a las presiones, a la vigilancia policiaca. El movimiento se replegó.

Surge el FPE

En el sexenio de Fonseca Alvarez (1973-1979) el esquema político rochista se prolonga como el problema del transporte urbano por el incremento de las tarifas. Y la respuesta de la comunidad universitaria fue la misma: el secuestro de unidades.

El gobierno descalificó al movimiento estudiantil que se organizó bajo el nombre del Frente Popular Estudiantil, impulsado principalmente por Julio Hernández López (Derecho), Ricardo Moreno Barajas, Héctor González Charó (Economía) y Jesús Mejía Lira (Preparatoria).

La Federación Universitaria Potosina estaba en manos de Gustavo Rosales en sustitución de José Luis Sandoval, expulsado de la UASLP. El FPE lanza una

convocatoria para ampliar su radio de influencia con maestros y obreros. La dirección se hace colectiva y la representación estudiantil pierde la mayoría, por lo tanto hay un consenso más amplio y le imprime una calidad diferente al movimiento, aunque campeaba la idea de que Julio pretendía lanzarse en pos de la FUP, asegura Carlos López.

La demanda de municipalización del transporte se empieza a diluir ante la dimensión amplia y variada que adquiriendo el movimiento estudiantil. El gobierno para no quedar aislado lanza una convocatoria a la que responden los concesionarios, sindicatos cetemistas y clubes de servicio a una reunión en Palacio de Gobierno, donde el FPE se presenta e impugna a los clubes con el argumento de que ellos no son usuarios del transporte.

Para reforzar la representatividad del FPE reunimos tres mil firmas que presentó el ferrocarrilero Rosario Valles, que contrastaban con las supuestas cuatro mil firmas que presentó el sindicato charro. En la reunión de palacio no se logró ningún acuerdo, el movimiento desbordó los mecanismos tradicionales de control del gobierno que tuvo que dar marcha atrás en el aumento. Fue una derrota política importante. Mucho antes ya habíamos adoptado una estrategia diferente de dejar el centro y nos fuimos a la periferia, a las colonias marginadas.

Considera que el movimiento estudiantil rompió el esquema de conciliación y estabilidad que siempre plantean los gobiernos priistas como las condiciones necesarias para un supuesto desarrollo de la entidad. El FPE era un interlocutor de otro signo que no podían controlar y menos con patronatos, como sí lo hicieron con los navistas. El gobierno fue rebasado por la izquierda.

La correlación a la izquierda

El domingo 26 de enero, recuerda, hubo un mitin en el Mercado Revolución. El gobernador ya había revocado el aumento tarifario. La respuesta popular fue significativa: amas de casa, obreros, jóvenes, ancianos. Nos dimos cuenta que las bases del navismo encontraron la coyuntura para resurgir. Eso fue lo que pesó mucho en el ánimo del gobierno para tomar la decisión de pasar a la represión, no había ya posibilidades de negociar, la lucha política pasaba por una correlación de fuerzas a favor de la izquierda.

En ese mitin aparecieron los volantes donde se me ataca a mí de “cochino comunista, vendido a Moscú”. Eran anónimos, de supuestos defensores de los valores nacionales, religiosos, y al final del mitin tuve que irme escoltado por un grupo de ferrocarrileros, porque en un camión llegaron varios hombres con palos, enviados por los permisionarios. La gente los rechazó.

Me refugié en la casa de un compita del riel. Por la madrugada llegué a mi departamento del Multifamiliar. En la mañana fui a la escuela y ahí me detuvieron.

Subraya que en la UASLP, maniataada por fuerzas retrógradas, desde el 71 se había iniciado un proceso para recuperar la representación estudiantil, democratizarla, y sacar a la universidad de su enclaustramiento, se estaba vulnerando la hegemonía del llamado Grupo Universidad.

El espectro de la izquierda estudiantil era amplio y diverso, estaba representado por varias corrientes: leninismo, maoísmo, trotskismo, foquismo guevarista... Nos declarábamos comunistas, buscábamos un cambio de raíz. Era una utopía. Luego de la represión contra el FPE, vino la cooptación de los dirigentes, y se inicia la formación de los grupos estudiantiles que serían conocidos como Olivo, Bronce, Mestizo, Zapata, Imagen...

Con el paso del tiempo los dirigentes, menciona López, tomaron diferentes barcos. Gustavo Rosales fue funcionario de Banobras, Julio Hernández hizo carrera en el PRI-gobierno y en el periodismo, Mario López El *Mao*, en Banrural; Fernando Díaz de León, en el Coepo; Ricardo Moreno Barajas y Héctor González Charó, exfuncionarios del ISSSTE.

Las orejas de Fonseca

Del exgobernador Fonseca Alvarez, afirma que la historia lo muestra como un represor y quien cancela toda posibilidad de un cambio. El dirigente campesino Eusebio García es asesinado en 1975, después vendría la expropiación de El Gargaleote de Gonzalo N. Santos y el reparto de tierras echa andar el proyecto del Pujal-Coy. El movimiento campesino se repliega.

Carlos López Torres, casado y con tres hijos, resume su experiencia como dirigente del FPE: es la marca política de mi vida, definió mis convicciones, mi forma de pensar.

Un mes después de que fue liberado, aun convaleciente de la tortura, asistió a un mitin en Fundadores contra la represión, invitado por el grupo de teatro Zopilote. Tomó

el micrófono e imperativo les dijo a dos agentes judiciales que estaban de *orejas* en primera fila:

–Quiero que anoten bien y le digan a su jefe Fonseca, que sigo siendo el mismo y que nada me va a hacer cambiar.

(*El Ciudadano Potosino*, 27 y 28 de enero de 1995)

IV. FONSECA, EL RESPONSABLE HISTORICO: JULIO HERNANDEZ LOPEZ

El líder moral del movimiento era José Luis Sandoval, asegura el ahora periodista Julio Hernández, detenido a los 20 años cuando estudiaba derecho por su participación en el FPE. Se enarbolaron múltiples demandas del pueblo, pero todo giraba en torno a cinco centavos de incremento al transporte urbano. A su casa llegó el halcón Rogelio Flores Berrones a las cinco de la mañana con treinta policías para detenerlo. El tratamiento que se le dio tras las rejas, en la lista primaria de tortura.

José de Jesús Ortiz

Julio Hernández en 1975 cursaba el primer año de la carrera de Derecho. Tenía 20 años y era uno de los dirigentes visibles del Frente Popular Estudiantil. El 27 de enero de ese año fue detenido bajo múltiples acusaciones: sedición y homicidio calificado, entre otros.

El exdirigente del PRI estatal recuerda cómo se dio aquel capítulo de su vida y de las luchas sociales de San Luis Potosí. Se pronuncia por una reapertura de los expedientes del Ejército y de los órganos gubernamentales, para así deslindar responsabilidades.

“No se cuánto sirva un pronunciamiento mío, pero sí me gustaría mucho que se hiciera una investigación seria de ese episodio”, asevera.

En 1975 el FPE ponía en ebullición el interior de una universidad monolítica, que dos años antes, mediante la represión y la expulsión de estudiantes, había desarticulado el movimiento estudiantil-popular encabezado por José Luis Sandoval.

Dos años después nuevos liderazgos habían surgido y la articulación universidad-sociedad había sido conjugada sobre la base de una demanda común: el alto al incremento a las tarifas del transporte urbano.

El recuerdo moral

Lo que provocó la organización y la movilización estudiantil popular de 1975 –afirma– fue la ebullición proveniente del movimiento estudiantil que encabezó José Luis Sandoval de 1971 a 1973, con mucha movilización en los ámbitos obrero y campesino.

Sin embargo, Sandoval, López de Olmos y Cruz Elena García Navarrete, principales líderes universitarios del primer lustro de los 70, ya no se encontraban en San Luis Potosí cuando la lucha estudiantil recobró vigor e influencia.

Y añade que sin lugar a dudas el ausente José Luis Sandoval, expresidente de la FUP (1973), fue el “gran líder moral” del movimiento estudiantil de 1975 que terminó con el estallido de tres bombas en el centro de la ciudad.

El liderazgo de Sandoval hizo parte de la lucha estudiantil las demandas de los campesinos del Campamento Tierra y Libertad de la Huasteca, que demandaba la dotación de tierras en poder de los grandes caciques como Gonzalo N. Santos. Se unificaron estudiantes y campesinos.

Los meses anteriores al atentado del 27 de enero del 75, eran de una “intensa” movilización estudiantil, social. Por un lado, las demandas de los estudiantes exigiendo el no incremento de cinco centavos al transporte urbano, por el otro, la invasión de algunos predios de la Huasteca.

Todo esto “cohesionado” en torno al FPE. “Yo insisto: José Luis Sandoval fue el pivote, y moralmente fue siempre un recuerdo y una presencia para los estudiantes del FPE, pero en ese momento entramos a la actividad estudiantil como cuadros nuevos”.

Si en 1973 a Sandoval, estudiante de Economía, lo acompañaron dirigentes como Cruz Elena, Saíd López de Olmos y otros más, dos años después, apareció el FPE con nuevos liderazgos, entre ellos Ricardo Moreno Barajas y Jesús Mejía Lira. La representación en la dirección del frente no era la visión típica del corporativismo, sino que era una idea “muy democrática del trabajo político”.

La exigencia central del movimiento, la disminución del precio del transporte público, cinco centavos, ahora puede verse como “inofensiva, inocua” para el gobierno del estado. En realidad, advierte, lo que hacía peligroso para el gobierno era la vinculación de los estudiantes con causas populares, la cohesión que se daba en múltiples demandas ciudadanas. En ese momento era el pasaje, después serían otras demandas de la gente.

“Había una conciencia crítica muy clara, la actitud del movimiento realmente podía hacer cimbrar el esquema autoritario del gobierno”.

El problema mayor para el régimen era que súbitamente se estaba “nucleando” toda una serie de inconformidades de los ciudadanos. Así, de pronto se encontraron con un movimiento obrero, campesino, urbano y popular que estaba organizado y con posibilidades de avanzar.

Reflexiona que se pudo pasar de las demandas sociales a un plano político y convertirse en un “contrapeso real al ejercicio del poder”, pues en ese momento no había un punto de equilibrio. El propio navismo “estaba replegado”, por lo cual el FPE parecía provocar “cuando menos agruras en la mesa del poder”.

En síntesis: el movimiento popular-estudiantil del 75 era la “amalgama de la amargura”, de los problemas de la gente, con la frescura y la alegría del movimiento estudiantil. Esa “mescolanza era inaceptable” para el gobierno autoritario de aquellos años, por lo cual decidió desactivarlo mediante los bombazos.

Hoy cualquier marcha o plantón son y hasta pueden verse como cotidianos, pero en 1975 esas eran actitudes subversivas.

Su memoria y los acontecimientos del 75 parecen mucho más recientes de lo que aparentan estar en el inconsciente colectivo. El día anterior de ese 27 de enero, un domingo, el FPE había convocado a una mitin en el Mercado Revolución: “Hubo buena asistencia. De allí fui a visitar a una amiga y posteriormente a cenar en la Cenaduría Santuario, en la calzada de Guadalupe. Luego fui a mi casa a dormir”.

Cerca de las cinco de la mañana de ese día, bruscamente tocaron en su casa, en la Unidad Ponciano Arriaga. “Me asomé por la ventana y al ver de qué se trataba quise correr”. Estaban parapetados en unos árboles como treinta efectivos policiacos comandados por Rogelio Flores Berrones, a quien se le recordaba por su participación en la represión a estudiantes en el Jueves de Corpus de 1971.

“Dijo que quería hablar conmigo. Pues pásele, le dije a cierta distancia, pero no se animaba a pasar. Después me percaté de cuantos hombres eran y que tenían rodeada la casa. Flores Berrones me dijo que lo acompañara. Pensé que no había de otra y mejor los acompañé al Charco Verde”.

Poco después escuchó, junto con los demás detenidos, la letanía de cargos por los cuales fueron detenidos. Ahora que lo recuerda, Julio sonríe, asegura que ya estaban haciendo planes para “pasar largas décadas de su vida en la cárcel”.

La tortura

A él lo detuvieron durante diez días, en los que continuamente fue traslado de la Penitenciaría a la Procuraduría de Justicia del Estado, siempre en compañía de efectivos del Ejército Mexicano, que se había hecho cargo de la situación de la ciudad.

Miguel Nazar Haro –conocido represor de militantes de izquierda– tomó el mando de la investigación y habría sido él quien torturó a los detenidos. Julio Hernández confiesa que nunca pudo ver si se trataba de esa persona, pues desde el principio los mantuvieron incomunicados y con los ojos vendados.

“Sin embargo, en el San Luis de entonces el arribo de un avión privado era todo un acontecimiento, y hubo un múltiples *evidencias* de que efectivamente el encargado de la investigación, y por consiguiente de las torturas, fue Nazar Haro”

–¿Sufrió tortura?

–Hay cosas a las que nunca me ha gustado entrar en detalle, porque forman parte de los expedientes oscuros de cada persona. Desde luego no puedo decir que fui tratado con una gran brutalidad, pero digamos que estuve en el catálogo primario de la tortura.

A los diez días, dice, lo soltaron porque no existían pruebas de su culpabilidad, ni la del resto de los detenidos. Además de que no había pruebas, había “una gran movilización de lo que hoy se llamaría sociedad civil, de universitarios y de la gente con la que hacíamos trabajo político. Finamente todo quedó en lo que era: un subterfugio del estado para frenar el ascenso del movimiento social. Ese momento fue de gran importancia para el ascenso de la lucha social potosina, pero por desgracia, no pudo pasar de ahí”.

Quedó clara la autoría del Estado

El responsable histórico de aquellos acontecimientos, asevera, es el exgobernador Guillermo Fonseca Alvarez, y con la distancia que otorgan los años transcurridos se pronuncia también por la reapertura de los expedientes que consignaron el caso, pues asegura que a todos los implicados les quedaron siempre cabos sueltos que jamás han entendido.

Retoma el hilo del relato hasta detenerse en el mitin del 26 de enero, un día previo a los bombazos, en donde misteriosamente se repartieron volantes acusando a los integrantes del movimiento de ser líderes rojos, financiados por Moscú.

El tono de aquel volante, revela Julio Hernández, “nos pareció muy premonitorio, como si alguien estuviera preparando el terreno para que lo que se avecinaba”.

Fonseca Alvarez tiene la “responsabilidad histórica” de lo que ocurrió y de las muertes que provocó ese atentado. Considera que con la forma en que se “resolvió” el

movimiento estudiantil, los gobiernos estatal y federal evidenciaron su “absoluta incapacidad” para responder a múltiples demandas sociales.

Por otro lado, en esos años había “todo un clima propicio” para la represión de movimientos sociales, recuérdese que eran los años posteriores a los sucesos de 1968 y más recientemente de la represión a estudiantes el 10 de junio de 1971. Explica su versión y asienta que Fonseca, junto con el Estado político mexicano, utilizaron de coartada los bombazos para desactivar el movimiento y acusar a sus líderes de ser miembros de la Unión del Pueblo.

Pero la Unión del Pueblo, reitera, fue acusada de ser una rama más del gobierno, además de estar bajo la “sospecha permanente de ser utilizada por el gobierno para infiltrarse en los movimientos de izquierda y construir las condiciones propicias para su represión. Nuestro movimiento asimila, desde luego, que no fue la excepción. A nosotros nos quedó muy claro que el episodio de las bombas fue obra del Estado mexicano, que utilizó su brazo oscuro representando en la Unión del Pueblo”.

—*¿La mano del Estado a través de Guillermo Fonseca?*

—Yo creo que sí, en lo particular pienso que ante la incapacidad política para enfrentar un movimiento como el que se estaba gestando, Fonseca Alvarez aprovechó las circunstancias y así fue como busco resolverlo.

Después de la represión y de la desactivación del movimiento estudiantil-popular, Julio Hernández continúa la carrera de Derecho, la concluyó en 1979. Dos años antes había ingresado al PRI. Casi a la par de su ingreso al otrora partido oficial, incursionó en el periodismo local y nacional. Fue reportero del *Unomasuno*, y posteriormente fundador de *La Jornada*.

A la distancia de los años, su imagen parece ser la misma de aquel líder estudiantil de rostro sorprendido que retrató la prensa en 1975; ahora con el cabello más corto que el utilizado en aquellos años, pero asegura que esencialmente sus convicciones continúan siendo las mismas.

Después de la represión

Luego del estallido de las bombas, precisa, la dirección y organización del movimiento fue “descabezada”. Sus principales impulsores se apartaron de la actividad política y muchos fueron expulsados de la universidad, aunque aclara que él no fue suspendido de sus actividades escolares y concluyó sus estudios en San Luis Potosí.

Las condiciones al salir de prisión, considera, fueron difíciles; quienes eran estudiantes volvieron a salir a las calles y efectuaron algunas movilizaciones pequeñas, pero la “gente adulta” con más problemas se fue alejando poco a poco.

En el fondo, siempre la mano dura del régimen asusta a muchas personas, y en aquel movimiento esto no fue la excepción. Argumenta que aquel momento difícil fue para muchos de gran reflexión. “Cada quien tomó un camino distinto, algunos prefirieron la abstención política. El caso de Carlos López Torres, por citar alguno, es el de un hombre ejemplarmente congruente: como lo conocí, así sigue. Los demás dirigentes tuvieron diferentes desempeños; yo ingresé al PRI en 1977, nunca antes había militado en ningún otro partido. Lo que sucede es que cada quien tiene que buscar su propio campo de desarrollo y de salir adelante políticamente”.

A mediados de los años 70, los caminos políticos viables eran únicamente dos: militar en el PRI o participar en la “oposición marginal”, que no era y no representa ahora una verdadera opción de cambio.

Del Partido Comunista en San Luis Potosí, expresa que en 1975 lo conformaba un “grupo reducido”, militantes que moralmente eran muy valiosos, pero que estaban “sumidos” en las luchas internas y “amarrados” a los dogmas tradicionales.

Y participar en algún partido político de derecha, dice, realmente no “encajaba y no había ninguna identidad” de parte de la mayoría de los estudiantes.

Secretario general del PRI —en tiempos del gobierno de Florencio Salazar Martínez—, cargo al que renunció el primero de enero de 1986 en protesta por la golpiza de porros y judiciales contra manifestantes en la Plaza de Armas, argumenta que se ha mantenido en el PRI siempre en un esquema de búsqueda democrática.

“Creo que la chispa que yo pudiera tener —asegura convencido—, sumada a la izquierda no sería absolutamente nada, pero esa misma chispa aportada a la lucha interna dentro del PRI creo que sí significa algo”.

Lo que ocurrió en 1975 no es el epílogo de las luchas sociales de San Luis Potosí; puede verse sí como un acto más de larga historia de la izquierda potosina, que en ese momento no supo aprovechar la fuerza ascendente que tenía.

Fuera de las coyunturas electorales, no se ha vuelto a dar una lucha social como la de aquel momento, la correlación de fuerzas sociales —teoriza Julio Hernández— no ha vuelto a ser activada, pese a que las causas que originaron ese movimiento persisten y quizá ahora más agravadas.

Por desgracia, puntualiza, en San Luis Potosí no hemos podido conformar un verdadero movimiento de izquierda que sea una alternativa para los ciudadanos. Yo lamento mucho que en estos momentos el PRD no tenga la fuerza que se merece en SLP, pues una izquierda y un PRD débiles hacen mucho daño a la democracia, alientan los signos de endurecimiento y de antidemocracia dentro del sistema.

Afirma que está tranquilo consigo mismo, pues ha optado por un camino que es el de luchar por los avances democráticos dentro del PRI. De los bombazos, dice a manera de conclusión, fueron un momento dramático que marcaron mi vida, pero también la han marcado mi incursión en el periodismo nacional y la “experiencia inolvidable” vivida al lado de Luis Donaldo Colosio cuando era dirigente nacional del PRI.

(El Ciudadano Potosino, 29 y 30 de enero de 1995)

V. SOBREVIVE EL ESPÍRITU REVOLUCIONARIO DE PRISCILIANO PEREZ

Era el líder del PCM cuando los bombazos. “Una provocación de Fonseca”, realizada por la Policía Judicial dice en entrevista,. Lo detuvo Héctor del Castillo, lo querían vincular con la Liga 23 de Septiembre y Genaro Vázquez. A sus 76 años, ejerce la abogacía.

Oscar A. Martínez

Para Prisciliano Pérez Anguiano el paso del tiempo sólo se reflejó en las arrugas de su rostro, su piel morena es la misma, como sus principios y su doctrina marxista. Sus recuerdos no han envejecido, aún es el *líder* del Partido Comunista Mexicano en San Luis Potosí, a pesar de que desapareció.

Es pasado le recuerda, junto a un calendario con imágenes de los presidentes, que en el periodo de Luis Echeverría Álvarez se suscitó un hecho controvertido. Tres explosiones en el centro de la ciudad iniciaron una persecución política contra los comunistas y los estudiantes, que se habían unido para protestar por los aumentos en las tarifas del transporte urbano.

Prisciliano dice que los bombazos “fueron una provocación del gobernador Guillermo Fonseca Álvarez”, que fue realizada por la Policía Judicial. “Ninguno de los estudiantes, ni nosotros tuvimos responsabilidad”, asegura, se les acusó de tener nexos con la Liga 23 de Septiembre y Genaro Vázquez.

Refiere que, además, de las aprehensiones de los dirigentes estudiantiles como Julio Hernández López, también se dieron las de los líderes del PCM, Carlos López Torres y él. Platica que “nosotros los comunistas”, después de ser aprehendidos “con la usual manera que acostumbra la policía de amedrentar”, fuimos reunidos con los estudiantes, en un automóvil, acostados en los asientos “de modo que al transitar por la calle no se viera que íbamos detenidos”.

Se dio cuenta de que Julio y Carlos están a su lado, en el asiento del carro. También sintió el mareo que provoca dar varias vueltas por la ciudad. Los policías le miraban por el espejo retrovisor, hasta que “nos metieron en el cuartel”.

“Y así nos dividieron”, cuenta Prisciliano Sus ojos parecen mirar los altos muros del cuartel militar, de la entonces avenida Juárez: “A Julio se dice que lo torturaron, no me

consta, pero no mostró ninguna señal de tortura, eso sí, estaba un poco quebrantado en su estado de ánimo. A López Torres sí lo golpearon”.

“No me bajaban de pinche comunista”

A Prisciliano le tocaría otra suerte. Según relata, le vendaron los ojos, le amarraron las manos por la espalda y lo llevaron escoltado a los terrenos del Hospital Militar, entonces en construcción. “Me amenazaron con formar el cuadro”, dice cuando levanta sus manos, que parecen detener el viento desde su escritorio. Lo recargaron en uno de los “muros del fondo” que da a la calle de Morelos, con los brazos abiertos.

Sólo escuchaba el paso de las botas militares. La venda estaba apretada, no podía ver nada, el cansancio le pesaba. Los pasos se acercaban. Sentía los respiros en las orejas, le decían: “Te va a llevar la chingada”, “ya tenemos aprehendida a tu familia”, sabemos en dónde están tus hijas”. Así pasó el tiempo, en cuyo lapso “no me bajaban de pinche comunista” y “enemigo del buen gobierno”, recuerda. Hasta que lo levantaron y lo empujaron para caminar.

La venda le tapaba el viento frío en la cara. Dos personas lo jalaban de los hombros, por un tramo largo. Sintió que llegaron a un corredor, por el sonido sordo y alejado del “golpeteo de un martillo en la madera”. Hasta que a sus oídos llegó un ruido más fuerte y penetrante, junto al chirrido de una aldaba. Los que sostenían a Prisciliano preguntaron: “¿Ya está maestro?”, la persona que clavaba la madera, contestó: “La puerta está en condiciones”.

Un momento después lo empujaron, sus pies chacualearon en el agua encharcada. Se mojó el pantalón y se sintió encerrado: estaba en un cuarto casi cuadrado de unos dos metros y medio de altura, en donde un olor pestilente emanaba de abajo. “No me podía ni sentar porque estaba bien mojado el piso”. Le dijeron que en un rato vendrían a liberarlo, cerraron la puerta y la oscuridad envolvió el lugar; seguía con la venda en los ojos.

A las dos horas escuchó el ya acostumbrado sonido de las botas militares. La puerta se abrió de repente. Pensó que era el verdugo que empezaría a golpearlo, sin embargo, era un soldado que, al verlo amarrado y vendado, le preguntó: “¿Qué hace usted aquí?”, Prisciliano le contestó que no sabía, “nomás me dejaron los agentes aquí”. El militar ordenó que se recargara en la pared. El comunista puso sus manos en el muro: “Sólo pensé en los cintarazos que me darían en la espalda”. La voz, por el contrario, anunció:

“Lo voy a desamarrar, le voy a dejar dos vueltas. Pero cuente hasta veinte antes de destaparse los ojos”.

Le desataron las manos y oyó las pisadas que se alejaron. Se quitó la venda luego de contar hasta veinte. “Me di cuenta de que estaba yo solo”, recuerda tras sus gruesos anteojos. No supo el nombre de su liberador, y no fue fácil aceptar la realidad que vivía. La puerta estaba cayéndose, hecha con pedazos de cimbra y desperdicio de madera; por las rendijas miraba a los soldados de “un lado para otro”. Después escuchó a los judiciales que lo habían aprehendido. Venían por el pasillo, con macanas y baterías en las manos, Prisciliano se llenó de temor, en su cabeza giraba la idea de que ahora sí lo golpearían.

Casi tumbaron la puerta y lo encontraron libre de vendas y ataduras. Uno alto y chino, veracruzano por el acento, muy molesto le preguntó: “¿Quién te quitó la venda de los ojos, quién te desamarró las manos?”, él le respondió que no sabía. A un lado los otros cinco agentes comentaban, “vamos a darle en la madre”, pero el veracruzano los calló: “No, es mejor dejarlo así, porque está consciente y nos está viendo a todos”. En su despacho, 20 años después, recuerda el nombre de uno de los judiciales, Héctor del Castillo Chagoya, “ahora estará jubilado, no sé”, dice Prisciliano.

Luego uno de ellos le pegó en el estómago con una macana, se agachó y lo levantaron de los cabellos. Los judiciales iniciaron el interrogatorio: “¿Cuántas bombas pusiste?, pinche comunista. ¿Cuántos camiones secuestraste?, cabroncito”. No le respondió. Esperaba más golpes. Antes de irse le advirtieron: “Vamos a regresar, para partirte la madre”. Le pusieron un centinela. Todo estaba oscuro. No veía nada. Solamente la poca luz que entraba por las fisuras de la puerta. Se cansó de estar parado, pero no podía sentarse en el agua. Le pidió al vigilante algo para sentarse. Le pasó por abajo un cartón que extendió en el suelo, medio se recostó y el frío le calaba porque sólo traía una playera.

Titiritaba y sentía fiebre en el cuerpo, cuando llegaron los judiciales cargando ametralladoras y aluzando su cara. Se paró y los agentes se lo llevaron casi en la madrugada. Miró otra vez las paredes de piedra del cuartel, los soldados extrañados por la escena. A lo lejos cuatro carros de Gobernación lo esperaban junto a otros dos del gobierno estatal. Lo soltaron y le dijeron: “Vete para ese carro”, y enfiló hacia los autos federales, pero lo empujaron a los *ford* último modelo con la leyenda “propiedad del gobierno del estado” en las puertas.

Dos agentes los acompañaron. “Hasta me hicieron un alivio al sentarse a mi lado. No podía hablar porque mi garganta estaba cerrada, hasta que llegamos al Charco Verde”. Ahí lo metieron en una celda. Junto a él, Carlos López se quejaba, con el vientre abultado por los golpes, y no le cerraba el pantalón. Enfrente, Julio Hernández estaba en otra celda, más tranquilo. Recuerda que a Julio “prácticamente no lo tocaron”, porque “lo consideraron”. Dice que Carlos le preguntaba si lo habían golpeado: “Le dije que nada más había recibido un golpe en el estómago, que no sabía quién me desató ni qué sucedió”.

“No somos terroristas”

La noche pasó igual de fría. Al día siguiente, los llevaron a la PGJE, en donde les tomaron las huellas digitales. El procurador Horacio Ramírez Sornoza los miraba cuando rindieron su declaración; el agente del Ministerio Público los cuestionaba: “¿Qué relación tienen con la Liga 23 de Septiembre, se han entrevistado con Genaro Vázquez?, ¿quién detonó las bombas?”. Prisciliano les decía: “No somos terroristas, sólo andamos luchando contra el problema de la carestía de la vida”, y negaba que tuvieran conexiones con los grupos guerrilleros. Les dijo: “Esto fue una provocación del gobierno, Fonseca es un represor”.

Recuerda que la ciudad permaneció en estado de sitio, “en el primer cuadro dondequiera había patrullas y soldados. Lo único que les interesaba era encontrar terroristas o miembros de la Liga 23 de Septiembre”. Un ayudante del procurador Sornoza trataba de interpretar lo que decían como si aceptaran tener nexos con grupos armados. El procurador le dijo que no incluirían “eso de que Fonseca es represor, eso no”. Luego le dio instrucciones a unos policías para que se los llevaran a su casa, le anunció que los demás detenidos “de ahí van a salir”. Lo dejaron en la calle de Mier y Terán, en donde terminaba el cerco militar.

Prisciliano Pérez asegura que aún es comunista, allegado a la doctrina marxista. Dice que pese a las experiencias amargas, espera que haya servido para que cumpla “el anhelo de todos los revolucionarios”, la instauración de la democracia. “Las condiciones están dadas, sólo hace falta un tiempo corto para generar ese cambio en el país. Tengo la ilusión de que voy a vivir esos inicios”.

(El Ciudadano Potosino, 1 de febrero de 1995)

VI. UNA UNIVERSIDAD POPULAR, ABIERTA A LA SOCIEDAD, ERA NUESTRA ASPIRACION: JESUS MEJIA LIRA

Hubo condiciones para cambiar al estado, pero no supimos cómo luchar, señala en entrevista. En la UASLP se agudizó el perfil autoritario y se vive una paz con garrote y mordaza. Los bombazos fueron una acción del Estado para reprimarnos y evitar que el FPE alcanzara solidez al aglutinar a obreros y campesinos. Afectamos intereses de clase. No teníamos una definición política, había muchas corrientes: leninistas, trotskistas, maoístas...

Jesús Mejía Lira estudiaba en la Preparatoria Uno y formaba parte de la dirigencia del Frente Popular Estudiantil. Fue detenido como sospechoso de estar relacionado con el atentado terrorista del 27 de enero de 1975. Su padre, un prestigiado abogado, como protesta renunció a su cargo de juez. Jesús tenía 19 años.

“Lo que te diga no creo que tenga algún interés”, dice de entrada. Economista sin título a causa de la represión del Grupo Universidad, es un hombre reservado, de traje azul, desvanecida la imagen del encendido dirigente de barba y gafas, accede a la entrevista entre café y cigarros *Delicados*.

Antes de dar su visión sobre los bombazos, explica el origen y razones del movimiento estudiantil de la UASLP:

“Propugnaba por una universidad popular, abierta, menos elitista, y el desarrollo propio del movimiento hizo que se incorporaran sectores populares, lo que dio como resultado el nacimiento del FPE. En aquel entonces se tenía una articulación en todas las escuelas de la UASLP: Derecho, Economía, Comercio, Química... Nos incorporamos a los movimientos ferrocarrilero, campesino, electricista, fabril, de tendencia democrática. La lucha estudiantil trascendió los límites del estado y nos articulamos con el Frente Popular de Zacatecas y con la Universidad Autónoma de Guerrero”.

Agrega que “se trataba de consolidar un movimiento de masas, y definitivamente estaba en contra del Estado. Todos los que fuimos afines a José Luis Sandoval compartíamos la propuesta de articularnos a la lucha popular; abrir la universidad a la sociedad, y el lema fue *Por una universidad abierta*, cosa que hasta hoy sigue sin cumplirse”.

Circulaban periódicos clandestinos

En el mitin del 26 de enero de 1975, fue un activo brigadista y fogoso orador como en la mayoría de los actos organizados por el FPE. “Trascendimos el problema del transporte y nos fuimos contra la carestía, la injusticia agraria y salarial. La incipiente importancia que estaba cobrando el movimiento motivó la represión porque estábamos afectando intereses de clase, del Estado, al grupo hegemónico de la universidad; no había entonces fuerzas políticas con la presencia que tienen ahora”.

Narra cómo ocurrió su detención: “Supimos que había sido detenido Julio Hernández López. Entonces Ricardo Moreno Barajas, Héctor González Charó y yo fuimos con el director de Policía y Tránsito, Rogelio Flores Berrones, y nos dijo: ‘Qué bueno que vinieron, se evitaron maltratos, ya saben cómo somos’, y nos encarcelaron y empezó el peregrinaje: la Policía Judicial, la XII Zona Militar y la Penitenciaria. Nos fue bien a todos, salvo a Carlos López. A mí también me vendaron los ojos, me dieron toques eléctricos, pero nada serio”.

No olvida la actitud de su padre al dejar su cargo en la judicatura en protesta por su detención: “Fue lo que más me pesó cuando estaba en la cárcel; después se reincorporó a su trabajo”.

De Miguel Nazar Haro afirma que “lo conocíamos por los actos de ejecución que hizo contra miembros de la Liga 23 de Septiembre. Estuvo aquí al frente de las investigaciones. Inicialmente nos quisieron vincular con esa organización guerrillera, después trataron de atar cabos con movimientos populares, se comentaba mucho que teníamos armas, explosivos...”

—¿*El Frente Popular Estudiantil tuvo contacto con grupos armados?*

—Lo que sé es que en aquel tiempo había gente que participaba en la Universidad Autónoma de Guerrero, y circularon en la UASLP varios periódicos clandestinos como *Madera*, el ideario del Partido de los Pobres, el cual fue difundido por la Federación Universitaria Potosina.

—¿*Cuáles fueron los errores que cometió la dirigencia del FPE?*

—Nos faltó mucho, no supimos cómo luchar aunque teníamos muchas ganas de luchar. La prensa estaba comprada; los cañonazos eran tan fuertes como ahora que no se resisten. De haber tenido una mayor organización y respuesta popular, no nos hubiera pasado lo que nos pasó, y el gobernador Guillermo Fonseca Alvarez hubiera caído, no aprovechamos las condiciones, que sí las hubo para cambiar al estado. El movimiento carecía de madurez, de organicidad, de definición política, porque había muchas corrientes: trotskistas, maoístas, leninistas... Yo me identificaba en general con el

socialismo. Seguimos buscando respuestas en las teorías sociales. La necesidad del cambio es ahora con mayor fuerza.

—*¿De qué manera afectaron su vida los bombazos y el encarcelamiento?*

—Sentí rabia e impotencia, pero se reafirmó en mi conciencia que lo que había hecho estaba bien. Al salir de la Penitenciaría tratamos de continuar la lucha y hacer un mitin de denuncia en Fundadores, pero no se pudo porque estaba ocupada por el Ejército. Ya no pudimos articular el movimiento. El golpe, el miedo, la represión habían arrojado sus frutos.

—*¿Acepta la versión de que las bombas las puso la Unión del Pueblo?*

—No. Fue el Estado. Sólo sé que fue el Estado. Definitivamente los bombazos del 75 fue una acción de terrorismo de Estado con el fin de desarticular el movimiento y que no alcanzara un nivel de organización sólida.

Las enseñanzas del doctor Nava

Refiere Mejía Lira que “la situación de la UASLP no ha cambiado desde entonces, más bien se ha agudizado su precaria condición, su retroceso. Es una universidad dictatorial, dura, no tiene un compromiso social. En parte nos explica la situación política del estado, porque la UASLP no ha formado cuadros políticos que enriquezcan la vida social. No hay academia, no hay crítica, no hay participación, no se regeneran los cuadros políticos, los cuadros productivos de la entidad. Hay desolación por todas partes”.

Como (el exrector Alfonso) Lastras “nunca quiso saber nada de la educación popular, cerró las preparatorias con el pretexto de la paz, pero es una paz con garrote y mordaza, que padecemos en toda la nación”.

Para responder sobre la coptación de algunos dirigentes estudiantiles por el gobierno, Mejía Lira recurre a una charla con el doctor Salvador Nava, de quien fue secretario particular en el segundo ayuntamiento que presidió: “Él decía que lo importante no era luchar, sino saber cómo luchar. Yo no satanizaría a nadie. No todos los del partido oficial son malos, ni todos los que están, por ejemplo, en el PRD, son buenos. Actualmente hay una recomposición de fuerzas. La historia pondrá a cada quien en su lugar”.

Mejía Lira está alejado de toda actividad política, trabaja en la empresa Aceros Nacionales, “como si fuera un agente viajero, una semana estoy aquí, otra allá, ando de pueblo en pueblo”.

(El Ciudadano Potosino, 27 de enero de 1995)

